

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 30° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-2943-2019
CARATULADO : RIVERA/RED DE TELEVISION CHILEVISION
S.A.

Santiago, diecisiete de Julio de dos mil veinte

VISTOS:

Que, con fecha 22 de enero de 2019, comparece doña **Carola Pamela Rivera Campusano**, abogado, domiciliada en calle 3 Oriente N° 1.270, departamento 92 A, comuna de Viña del Mar, quien interpone demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de **Red de Televisión Chilevisión S.A.**, sociedad del giro de su denominación, representada legalmente por don Jorge Carey Carvallo, abogado, ambos domiciliados en Avenida Pedro Montt N° 2354, comuna de Santiago.

I. Antecedentes de hecho relativos al contexto en que se produjo el ilícito civil en que se funda la demanda.

Sostiene que, doña Carola Pamela Rivera Campusano, en calidad de abogada y con ocasión de su ejercicio profesional, fue contratada para representar a don Luis Vega Vega y a su hijo, don Óscar Vega Elkins, con ocasión de una acción civil de precario dirigida en su contra en la causa rol N° C – 28879 - 2000, caratulada “Barbieri con Vega”, seguida ante el Juzgado de Letras de Villa Alemana y que tenía por objetivo el obtener la desocupación de la porción de terreno que ocupaban éstos.

Afirma que, en dicha calidad y durante la etapa de ejecución de la sentencia que ordenó el lanzamiento de sus patrocinados, fue contactada por personeros de la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Puerta del Sol SpA, que a la sazón, había adquirido el terreno en el cual se emplazaba la vivienda de sus patrocinados. En atención a que la inmobiliaria deseaba disponer a la brevedad del predio en el cual se encontraban viviendo por años sus patrocinados, debidamente facultada e instruida para ello inició en nombre y representación de éstos, un proceso de negociación con la finalidad de facilitar su salida desde el terreno de propiedad de la inmobiliaria, a cambio de obtener en su favor una suma de dinero que indemnizara las mejoras incurridas durante su residencia en dicho lugar.



«RIT»

Foja: 1

Agrega que el proceso de negociación concluyó con la suscripción de una escritura pública, otorgada con fecha 7 de octubre de 2015, firmada por don Óscar Vega Elkins (hijo de sus patrocinados en la causa civil), quien firmó la escritura pública de transacción por sí y en representación de sus padres. Es así que mediante la escritura pública precitada se acordó en favor de don Luis Vega Vega, Victoria Elkins Elkins y don Óscar Vega Elkins el pago de la suma de \$90.000.000.- (noventa millones de pesos) y la entrega de 2 inmuebles correspondientes a viviendas económicas nuevas, acogidas al D.F.L. N° 2 ubicadas respectivamente en los lotes 209 y 210 del proyecto inmobiliario denominado Conjunto Residencial Marga Marga II que la Inmobiliaria e Inversiones Puerta del Sol construiría en el terreno entregado por mis clientes.

Expone que, en el marco de las tratativas mencionadas precedentemente, con fecha 13 y 17 de marzo de 2015, la actora suscribió con sus patrocinados un contrato de honorarios mediante el cual pactamos en la cláusula quinta de dicho acuerdo, el pago en mi favor de un porcentaje ascendente al 40% (cuarenta por ciento) que se aplicaría sobre toda suma de dinero que se hubiere obtenido mediante avenimiento, sea judicial o extrajudicial.

Indica que, una vez firmado el pacto de honorarios con sus patrocinados, y una vez suscrita la transacción con la inmobiliaria que generaría para ellos los beneficios económicos ya mencionados, fue pagada la suma de \$30.000.000.- (treinta millones de pesos), cantidad correspondiente al 34% de la suma recibida por mis representados, distante por cierto del 40% inicialmente pactado entre clientes y abogado, pero que libre y voluntariamente consintió en rebajar.

Detalla que, luego de suscribir la transacción, durante los primeros días del mes de junio del año 2016 tomó conocimiento de que don Luis Vega Vega y doña Victoria Elkins, tendenciosamente asesorados por su hija Luisa Vega y unos supuestos abogados, habían deducido una querrella en su contra, imputándole falsamente (a pesar de haber acordado honorarios y recibido los beneficios del acuerdo con la inmobiliaria) delitos de estafa y apropiación indebida.

Continúa señalando que ante la información obtenida, acudió de inmediato a la Fiscalía de Villa Alemana con la finalidad de esclarecer su absoluta inocencia frente a la mal intencionada imputación criminal formulada en su contra. Precisamente con ocasión de la comparecencia ante el Ministerio Público, pude comprobar que la Fiscalía de Villa Alemana dirigía una investigación por estafa y apropiación indebida iniciada en virtud de la querrella desprovista de todo fundamento, deducida en contra de la actora. Por esta razón, y en atención a la inexistencia de delito alguno y a la absoluta inocencia en los hechos, solicitó voluntariamente prestar



«RIT»

Foja: 1

declaración en la fiscalía de Villa Alemana, actuación que se realizó con fecha 7 de julio de 2016.

Manifiesta que, en este contexto y mientras con éxito fue demostrando en el proceso penal su total inocencia, la falsedad de las imputaciones formuladas en su contra, la inexistencia de delito y la ausencia de participación penal en los hechos que se le imputaban, con fecha 29 de agosto de 2016 el periodista Stjepan Tarbuskovic, funcionario del departamento de prensa de la estación de televisión privada Chilevisión, de propiedad de la Red De Televisión Chilevisión S.A., llegó a la quinta región con la finalidad de llevar a cabo un reportaje para su empleadora ya mencionada. De esta forma y buscando deliberadamente sorprenderla, el funcionario ya individualizado concurrió abruptamente a su lugar de trabajo, que a la fecha se encontraba ubicado en la sede distrital del diputado por la quinta región don René Rodrigo González Torres, ubicada en avenida La Marina, número 832, Viña del Mar, con la finalidad de armar un morboso, parcial y mal intencionado reportaje en donde la actora fue denostada y humillada sin consideración alguna, hechos que le causaron un profundo daño moral y que constituyen el hecho ilícito en contra del cual accionó extracontractualmente.

Señala que, con fecha 7 de septiembre de 2016, en la franja denominada “Reportaje a Fondo” exhibido en el Noticiero Central del canal de televisión Chilevisión, se exhibió el difamatorio y ofensivo reportaje en donde fue denostada públicamente de una manera vil, imputándosele la autoría de graves y falsos delitos bajo la expresión “Millonaria estafa cometida por abogada que trabaja en Congreso Nacional”, afirmándose en su contenido que se habría quedado con noventa millones de pesos junto al hijo de los denunciantes.

Hace presente que, estas imputaciones falsas, ofensivas, humillantes y formuladas de manera irresponsable y negligente por el reportaje del canal de televisión Chilevisión cambiaron para siempre su desarrollo profesional, afectando profundamente su vida personal, ambas circunstancias, que atendida su gravedad han puesto a la actora en la necesidad de ejercer esta acción civil indemnizatoria con la finalidad de acoger la demanda e imponer a la demandada la obligación de indemnizar el enorme perjuicio moral y lucro cesante que se ha irrogado.

II. Hecho ilícito civil.

Expone que no cabe duda alguna que, a los medios de comunicación social, les resulta plenamente exigible el ejercicio de un periodismo veraz, prudente, parcial y compatible con la protección de la honra y dignidad del ser humano. Por cierto, estos límites exigibles al periodismo de forma alguna obstruyen ni obstaculizan la libertad de información ni la libre expresión,



Foja: 1

sino que buscan precisamente evitar que bajo la invocación de estos principios se produzcan actuaciones abusivas hacia los ciudadanos, desprovistas de toda prudencia y control y realizadas de forma descuidada y negligente sin resguardo de la honra de la persona o grupo objeto de la actividad periodística.

Continúa señalando que, lo anterior encuentra consagración en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República que señala que: “La Constitución asegura a todas las personas: 4°.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley”.

Reitera que, con fecha 7 de septiembre de 2016 la demandada, en horario prime de la televisión chilena exhibió un reportaje periodístico denominado “Reportaje a Fondo”, en el cual se formularon expresiones difamatorias del honor de la actora, información mendaz y distorsionada, incurriendo en grave negligencia en la revisión de la veracidad de la información que difundió, causándole un gravísimo daño moral al afectar directamente su imagen y labor profesional, honra y dignidad como persona.

Sostiene que, en la franja denominada “Reportaje a Fondo”, el periodista de la Red de Televisión Chilevisión S.A. (Chilevisión) Stepan Tarbuscovic, lideró un reportaje en el que se imputó la autoría en un delito de estafa, perpetrado en la comuna de Villa Alemana y ejecutado en contra de dos ancianos de dicha ciudad, coludiéndose supuestamente con uno de los hijos de ellos para perjudicarlos económicamente en la suma de \$90.000.000 (noventa millones de pesos).

Señala un desglose del reportaje evidenciando las difamaciones y a lo menos, imprudencia y negligencia con que se difundió para todo un país el reportaje referido:

a) El reportaje comienza con afirmaciones introductorias en las que se afirmó que un matrimonio de ancianos denuncia que su propio hijo junto a una abogada los habría estafado con 90 millones de pesos. Sin embargo, jamás, de la boca de dicho matrimonio se profirió en el reportaje imputación alguna hacia la abogada Carola Rivera Campusano, sino que únicamente se refirieron a su hijo Óscar. De esta forma, la imputación del reportaje fue exclusivamente periodística, falsa, demostrando un trabajo editorial negligente e irresponsable.

b) A continuación y con ocasión de la introducción del reportaje se afirmó que los supuestos afectados: “Acusan que la profesional trabaja en el congreso como asesora legal de un diputado”. Luego, iniciándose el reportaje se despliega en el centro de la pantalla la imagen de una pareja de



Foja: 1

la tercera edad, acompañadas de la frase destacada en una banda cruzada en el centro de la pantalla que afirmaba: “Millonaria estafa de abogada. Trabaja en Congreso Nacional.”

c) Más adelante, en pleno reportaje la voz en off del periodista del reportaje afirmó que: “Acusan que don Oscar Vega Elkins ayudado por la abogada Carola Rivera Campusano habrían obtenido de forma fraudulenta mandatos notariales para representar a Luis y Victoria en las negociaciones con la inmobiliaria”.

Sobre lo anterior, hace notar que no existió ninguna resolución judicial, de Juez Civil, de Garantía, de Corte de Apelaciones ni Tribunal Oral que siquiera esbozara la existencia de mandatos notariales fraudulentos, circunstancia que evidencia la morbosidad y falsedad de una imputación vertida de propia iniciativa por el periodista actuando en su el ejercicio de su labor para el canal Chilevisión.

Una labor profesional ética y rigurosa debió haber conducido al periodista a entrevistar a los notarios que intervinieron en las escrituras públicas o a los funcionarios notariales que participaron en su elaboración, sin embargo ello parecía no convenirle al morbo y exacerbación que perseguía con el reportaje.

d) En el minuto 4 con 35 segundos, la voz en off del periodista Tarbuscovic expresó, refiriéndose a mi persona: “Que ella se quedó con treinta millones y el restante se los entregó al hijo del matrimonio, de nombre Oscar Vega Elkins”.

Indica que, nuevamente se aprecia el ánimo difamatorio y a lo menos imprudente y negligente de la demandada en cuanto se imputa el quedarse ilícitamente (expresión que vierte en el contexto de un reportaje sobre una estafa) con \$30.000.000 (treinta millones de pesos), omitiendo groseramente informar a los televidentes del país, que los treinta millones de pesos que expresa corresponden a los honorarios pactados por escrito en su favor, en los pactos de honorarios individualizados en el capítulo primero de esta demanda y que le fueron exhibidos al periodista, que él conoció detalladamente y que omitió decididamente informar para hacer parecer que estos treinta millones me los había apropiado criminalmente.

e) De igual forma, el reportaje omitió informar que el hijo a quien se entregaron los sesenta millones de pesos (Oscar Vega Elkins) tenía un mandato notarial por escritura pública mediante el cual actuó recibiendo el dinero en representación de sus padres. Dicho mandato es válido y jamás ha sido cuestionado por decisión judicial alguna.

f) El reportaje omitió gravemente informar que mediante el acuerdo de fecha 7 de octubre de 2015 celebrado con la Inmobiliaria e Inversiones



Foja: 1

Puerta Del Sol, se pactó en favor del matrimonio Vega Elkins la entrega de dos inmuebles, cuestión que además se ratificó 28 días después mediante un contrato de promesa de compraventa de fecha 4 de agosto de 2016, suscrito por los propios querellantes representados por otra hija del matrimonio.

g) La única y exclusiva imputación formulada por don Luis Vega y Victoria Elkins en el reportaje jamás fue en mi contra. En efecto, en el minuto 5 del reportaje los supuestos afectados señalaron “Fue mal hijo no más, ambicioso, fue malo lo que hizo de quedarse con la plata y no entregarla no decirlos nada a nosotros, hacerle un trámite judicial porque este es un robo y una estafa.”

Luego, estas palabras dirigidas exclusivamente hacia su hijo Oscar Vega Elkins y pese a que las supuestas víctimas no mencionaron su nombre vinculándolo a estafa alguna, el periodista expresó irresponsablemente lo siguiente: “De estafa acusan a su propio hijo y a la abogada que lo ayudo”. De este modo, cómo es posible que un periodista, ante la evidencia de que los entrevistados nada dijeron de su persona insista livianamente con la imputación de estafa. Esto francamente se aleja de todo comportamiento ético, y de un correcto ejercicio del periodismo, toda vez que distorsiona y manipula las expresiones de los entrevistas para la obtención de objetivos propios de la morbosidad televisiva.

h) A partir del minuto 6 del reportaje, este se centra en el verdadero motivo del mismo, que era destruir su imagen profesional por el solo hecho de estar vinculada laboralmente a un diputado del PPD., deteniéndose mal intencionadamente y sin motivo alguno en su calidad profesional, para denostarla y humillarla ante todo un país.

i) En el minuto 7:26 y con ocasión de la entrevista realizada al hijo del matrimonio denunciante, don Oscar Vega Elkins, el periodista, de su propia boca afirma que “El acuerdo son las dos casas y los noventa millones de pesos.”. Esta expresión es grave y demuestra la manipulación difamatoria y, a lo menos imprudente y negligente con que se elaboró y presentó el reportaje, pues el periodista a cargo del reportaje reconoce en su expresión que sabía que el acuerdo obtenido en favor de la familia fue de 90 millones y 2 casas, sin embargo omitió hablar de dichos inmuebles en el reportaje porque de esa forma hubiera desaparecido todo perjuicio económico, - el hijo recibía dinero y los padres recibían 2 casas de mucho mayor valor - entonces ocultó dicha información para construir un engaño artificioso y falso. De este modo, existen una serie de preguntas que no le convenían al reportaje, toda vez que, de haberse formulado habrían demostrado la existencia de vínculos contractuales válidos que habrían diluido el morbo con que se pretendía atraer audiencia.



Foja: 1

j) Ahora bien, se hizo figurar como abogado a una persona que no era abogado a la fecha del reportaje, figurando con un nombre que no era el de él utilizándolo para apoyar la acusación del reportaje. En efecto, en el minuto 9 con 28 segundos del reportaje se observa un hombre de traje en una oficina, mientras en la pantalla aparecía en una huincha que cruzaba la pantalla con la siguiente expresión: Rodrigo Silva, abogado de ancianos. Esta imagen corresponde a una información falsa y manipulada toda vez que quien aparece hablando para incriminarme no era abogado a la fecha del reportaje, ni se llamaba Rodrigo Silva. Sin embargo, la persona que aparece en el reportaje como supuesto abogado acusador se llama Luis Zúñiga Barrera, sujeto que según la información de la Excelentísima Corte Suprema obtuvo su título el 30 de septiembre de 2016. A pesar de ello, el periodista utilizó a alguien que no era abogado para apoyar las imputaciones individualizándolo con el nombre de Rodrigo Silva y que sí era abogado.

Reitera que, no cabe duda alguna que la demandada Red de Televisión Chilevisión S.A. emitió información falsa respecto de mi persona, actuando descuidada e imprudentemente, sin verificar la efectividad de la información que difundió el 7 de septiembre de 2016 en su denominado Reportaje a Fondo, exhibiendo la imagen de la actora más de 10 veces durante el reportaje, afirmando que estafó, omitiendo mostrar la documentación objetiva que acreditaba su inocencia.

Finalmente señala que, todo lo señalado anteriormente le ocasionó un gravísimo daño moral, afectando su imagen profesional, sentimientos, estado de ánimo, credibilidad y estado psicológico de manera aguda y profunda.

III. Acciones difamatorias y a lo menos negligentes e imprudentes que configuran la responsabilidad de Red de Televisión Chilevisión S.A.

Sostiene que, la actuación de la demandada fue totalmente imprudente e irresponsable al difundir información falsa difamando a la actora, a través de un medio de comunicación actuando dolosamente o, a lo menos negligentemente, distorsionando la información contenida en el reportaje provocando su deshonra, humillándola y afectando gravemente su imagen profesional y personal.

Afirma que, a propósito de la fidelidad, integridad y precisión necesaria que debe encontrarse presente en la información periodística, se ha resuelto que: "(...) resulta relevante destacar, de acuerdo con lo señalado por el recurrente y según se advierte de lo informado por los recurridos, que no se informó de manera certera la totalidad del proceso judicial en que el actor tuvo la calidad de imputado, desde que se advierte que no se precisó con nuevas publicaciones que el proceso fue sobreseído definitivamente



Foja: 1

luego de haberse verificado el cumplimiento del plazo y condiciones de la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento”. La citada resolución, dictada con ocasión de una acción cautelar de protección agrega: "Que, en este sentido, al no existir comunicación íntegra, los medios de comunicación recurridos -Radio Bío Bío, Televisión Nacional de Chile, Crónica Digital.cl y Gestión Regional de Medios S.A.- han actuado de manera arbitraria, puesto que han publicado únicamente la información que de acuerdo con el recurrente le perjudica y, en cambio, han omitido parte relevante de ésta, vulnerándose así el derecho a la honra que garantiza el numeral 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República". (Sentencia dictada por la Tercera Sala de la Excelentísima Corte Suprema, en la causa ROL N°8543-2018)

Expone que, en el citado reportaje, de manera organizada y deliberada, se fueron vertiendo vejatorias expresiones en su contra, imputando la estafa y apropiación indebida de sumas de dinero en perjuicio de dos personas de avanzada edad. Así, y mientras se difundían imágenes de los supuestos denunciantes, se iban paralelamente exhibiendo en forma destacada en la parte inferior de las imágenes, graves imputaciones criminales en mi contra, sin ningún rigor investigativo.

Indica que, en el mismo reportaje que se fueron exhibiendo en forma paralela al relato periodístico, acompañado de una voz en off, diversas huinchas conteniendo imputaciones criminales en su contra con absoluta vulneración de la presunción de inocencia y expresadas sin ningún rigor ni seriedad investigativa pues se trató de imputaciones redactadas por los propios periodistas y editores de Chilevisión (no formuladas por las víctimas) y exhibidas en forma destacada para que fueran fácilmente leídas por la ciudadanía.

Afirma que, las personas a quienes el reportaje presentó como víctimas de sus acciones - Luis Vega y Victoria Elkins - , jamás expresaron imputación verbal alguna en su contra en el reportaje, proviniendo éstas de expresiones de terceros ajenos al juicio penal y de los propios periodistas encargados del reportaje, acciones profundamente negligentes y totalmente carentes de la más mínima ética periodística. De este modo, al revisar el video que se acompañará como prueba en la etapa procesal respectiva, las personas presentadas como víctimas en el reportaje fueron entrevistadas y difundidas sus imágenes mientras la voz en off del periodista iba relatando imputaciones humillantes que aseguraba - sin ninguna prueba - habían sido ejecutadas por la actora. Hago notar que en ninguna de las intervenciones de dichas supuestas víctimas verificadas durante el reportaje, ellas la acusaron, imputaron ni formularon denuncia de acción delictual, criminal o ilícita realizada en su calidad de abogada.



«RIT»

Foja: 1

Hace presente que, Chilevisión emitió un reportaje en donde las imputaciones de comisión de delito que me fueron atribuidas, no fueron formuladas por quienes fueron presentados como víctimas, sino precisamente por el periodista del reportaje.

Relata que, con una clara intencionalidad política, se vinculó el carácter supuestamente delictual con el trabajo que la actora realizaba a la fecha de la exhibición del mismo para el diputado del Partido Por la Democracia (PPD) por la Quinta Región don Rodrigo González Torres. De esta forma, los periodistas buscaron de propósito, asignarle a las acusaciones de estafa esgrimidas en su contra un tinte político oscuro y vergonzoso, que agravara dicha falsa acusación y destruyera su imagen profesional y su labor en el congreso. Esto quedó demostrado al ser citada por el diputado al día siguiente de la emisión del reportaje de la demandada, oportunidad en la cual el parlamentario expresó que había perdido su confianza en el trabajo, despidiéndola en el mismo acto.

Asegura que, se exhibieron fotografías personales en donde la actora aparecía en actividades familiares, obtenidas subrepticia y mal intencionadamente, siendo expuestas para todo el país en el reportaje a fondo mientras se formulaban imputaciones delictuales en su contra de forma verbal y escrita, sin siquiera haber sido formalizada a esa fecha por delito alguno. Dichas imágenes fueron obtenidas sin su consentimiento, exhibiendo además su rostro en más de 10 oportunidades, señalando su nombre y apellido para todo el país, mientras se acusaba de estafa. Todo lo anterior, en una etapa investiga muy preliminar de la Fiscalía de Villa Alemana, sin juzgamiento, sin acusación penal ni sentencia condenatoria alguna en mi contra.

Agrega que, el reportaje de responsabilidad de Chilevisión fue emitido utilizando arbitrariamente y sin consentimiento, fotografías de su propiedad, para servir al propósito difamatorio perseguido por la demandada mediante el cual excedió groseramente su función informativa, imputándole acciones delictuales que no investigó con rigor y que por cierto, jamás se acreditaron administrativa ni judicialmente.

Reitera que, el denominado Reportaje a Fondo se exhibió con una total falta de rigor profesional y periodístico, toda vez que constando en el proceso penal incoado una declaración voluntaria de la actora, contratos de honorarios, comprobantes de pago, escrituras públicas de transacción, declaraciones de testigos, que demostraban su absoluta inocencia frente a los hechos, los periodistas, enfocados únicamente en acopiar relatos que la acusaran e imputaran, omitieron investigar los antecedentes, o entrevistarse con la fiscal del caso, o con algún encargado de prensa, o con la Fiscalía Regional, o pedirnos copias de nuestras presentaciones, etc.



Foja: 1

Advierte que, el reportaje difamatorio, o a lo menos negligente e imprudente, exhibido por Chilevisión ni siquiera tuvo la dignidad de responder en su contenido a un mínimo de imparcialidad en la entrega de la información, toda vez que junto al abogado Víctor Demaría Varas, con anterioridad a la emisión del reportaje difamatorio, concurrieron mediante una cita acordada con el periodista Tarbuscovic, a las dependencias de Chilevisión, ubicadas en Avenida Pedro Montt, N° 2354, comuna de Santiago. En donde el abogado fue directamente entrevistado y filmado, oportunidad en la que la defensa letrada exhibió al periodista una serie de documentos que acreditaban que solo se habían pagado los honorarios acordados por escrito e inferiores a los que incluso le correspondían a la actora. Dichos documentos fueron exhibidos al periodista de Chilevisión, el que de manera tendenciosa y con total falta de rigor, omitió la entrevista realizada al abogado, sin reproducir de forma alguna sus expresiones y los fundamentos de la defensa que acreditaban su inocencia frente a las imputaciones vejatorias, omitiendo, de igual forma exhibir la documentación que le había sido exhibida.

Alega que, en forma previa a la emisión del reportaje, Chilevisión tuvo a su disposición lo siguiente:

- a) Contó con la presencia del abogado a cargo de su defensa legal, en sus dependencias ubicadas en Avenida Pedro Montt, N° 2354, comuna de Santiago;
- b) Contó con una entrevista filmada del abogado a cargo de la defensa legal de la denunciada, entrevista que fue cercenada y no fue emitida;
- c) Contó con evidencia y antecedentes materiales escritos, presentados por la actora y que acreditaban sus descargos y defensa frente a las imputaciones formuladas por los querellantes;
- d) Optó, para apoyar la acusación en su contra, por mostrar y entrevistar a un señor con nombre falso y que no era abogado, omitiendo la entrevista a mi abogado, sin exhibir los argumentos de mi defensa que sostenían la inexistencia de delito alguno y por cierto sin exhibir la documentación que se llevó a la entrevista y en la que se apoyaban fundadamente mis descargos.

IV. Total ausencia de responsabilidad penal de la demandante.

Sostiene que, los hechos tendenciosamente manipulados por la demandada, habían formado parte de una querrella criminal deducida en contra de la actora y que dio lugar a la investigación RIT N° 749 - 2016, RUC N° 1610011622 - 0. En donde, la querrella fue tramitada y la fiscalía



Foja: 1

decidió formalizar una investigación en mi contra con fecha 17 de octubre de 2016, sin embargo, en dicha formalización la Juez de Garantía rechazó toda medida cautelar por falta de presupuestos materiales en su contra, esto es, ausencia de antecedentes que justifiquen un delito y por cierto ausencia de antecedentes que acreditaran participación criminal de autoría, complicidad o encubrimiento. Es decir, la Juez de Garantía, rechazó fundada y categóricamente que existieran antecedentes que permitieran presumir la existencia de algún delito y menos aún, que existieran antecedentes de participación criminal.

Relata que ésta decisión fue asimismo corroborada por el Ministerio Público de Villa Alemana, que con fecha 27 de julio de 2017 y luego de una investigación de varios meses, comunicó su decisión de no perseverar por falta de antecedentes para fundar una acusación penal.

Afirma que, su presunción de inocencia, ni judicial ni administrativamente, pudo ser jamás desvirtuada por los acusadores pues nunca los querellantes pudieron demostrar la existencia de ilícito alguno de la actora, sino tan solo la existencia de un pacto de honorarios legítimamente suscrito y ejecutado válidamente. Lo anterior, sin embargo, resultó insuficiente incluso para atenuar la total destrucción de su imagen profesional, vida laboral, y el enorme daño moral que le fue irrogado a través del reportaje emitido en horario prime para todo el país por la Red de Televisión Chilevisión S.A.

V. Fundamentos de la obligación de indemnizar por parte de Red de Televisión Chilevisión S.A.

Sostiene que, queda en evidencia que la actuación de Chilevisión fue ilícita civilmente, y que sus acciones y omisiones fueron ejecutadas con a lo menos con culpa, causando a la actora un inmenso daño moral que ha tenido inequívocamente por causa inmediata y necesaria la emisión de un reportaje denominado Reportaje a Fondo, descuidado, desprolijo, difamatorio, sin rigor ni seriedad periodística.

Afirma que, mediante la emisión del reportaje de Chilevisión no solo se vulneró la presunción de inocencia, sino que fue vejada, humillada vergonzosamente mediante un reportaje negligente, con información falsa, manipulando antecedentes para imputarme delitos que jamás contaron con prueba. Además, que el reportaje fue realizado buscando sorprenderla, sin permitirle real y seriamente la posibilidad de que su defensa letrada efectuara descargos frente a la imputación formulada en contra de la actora, cercenando la entrevista realizada al abogado, sin emitir imágenes ni los fundamentos de la misma, omitiendo la entrega de la documentación que presenté ante los periodistas.



Foja: 1

Agrega que, el canal Chilevisión, empleó vejatoriamente imágenes de la actora en situaciones familiares, exponiéndola arbitrariamente ante la opinión pública del país, mientras se formulaban y exhibían en su contra imputaciones relativas a la comisión de delitos que jamás fueron formuladas por las supuestas víctimas

Manifiesta que, la actuación precitada da cuenta de una conducta periodística irresponsable y gravemente negligente, toda vez que en el período de elaboración y edición del reportaje, el canal Chilevisión conoció las expresiones de las personas entrevistadas y a sabiendas de que ninguno de las víctimas me acusaba ni denunciaba por ilícito alguno, igualmente decidió imputarme mediante la exhibición de una franja que en la parte inferior de la pantalla señalaba “millonaria estafa de abogada”

Hace presente que, tal como se ha señalado jurisprudencialmente a la hora de acoger demandas indemnizatorias en contra de corporaciones o medios televisivos, dentro del patrimonio de toda persona: “se encuentran comprendidos toda clase de derechos, no sólo patrimoniales, sino que también aquellos que integran la personalidad, que carecen de contenido pecuniario en sí mismos, pero que al ser vulnerados, su reparación, quizá no completa, es susceptible de apreciación pecuniaria, entre los que indudablemente se encuentra el derecho a la imagen, objeto de este juicio, el que debe ser tratado como un bien jurídico, en este caso autónomo e independiente de la intimidad y honra, aun cuando generalmente sea considerado por la doctrina y jurisprudencia parte integrante de ese derecho fundamental”. (Mena Ortiz Claudia, con Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, causa rol C-723-2002/ 26° Juzgado Civil de Santiago, sentencia de 4 de abril de 2003).

Describe al igual que sucedió con la falsa imputación formulada en contra del aquel entonces senador Jovino Novoa, de ser supuestamente parte de una red de abuso infantil, en que la denunciante de la red Gemita Bueno, jamás profirió ni expresó verbalmente en la entrevista de Canal 13 siquiera el nombre de dicho senador, en el presente caso, jamás fue imputada en el reportaje por quienes según el mismo reportaje, tenían la calidad de víctimas de algún delito de mi parte.

Señala que, resulta pertinente mencionar que en el artículo 19 número 12 de la Constitución Política de la República, expresamente se reconoce la responsabilidad con que han de actuar los medios de comunicación en la difusión de la información periodística al establecer que: “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio; sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado”.



Manifiesta que, en los hechos mencionados en el acápite número II, queda en evidencia que la actuación de Chilevisión fue ilícita y que dichos ilícitos fueron cometidos, a lo menos con culpa, causándome un inmenso daño moral que ha tenido inequívocamente por causa inmediata y necesaria la emisión de un reportaje denominado Reportaje a Fondo, descuidado, desprolijo, difamatorio, sin rigor ni seriedad periodística.

Indica que, no cabe duda alguna que en la especie han concurren todos los requisitos que hacen procedente la responsabilidad extracontractual de la demandada toda vez que: a) El autor del ilícito civil es capaz b) Que el acto u omisión provenga de dolo o culpa; c) Que el hecho u omisión causa un daño d) Que entre el acto u omisión, doloso o culpable y el daño exista una relación de causalidad.

Advierte que, la demandada es una persona jurídica plenamente capaz de responsabilidad civil extracontractual, que además incurrió en un ilícito civil que ha de generarle una indudable responsabilidad civil indemnizatoria, tal y como se desarrolló latamente en acápites anteriores actuando con dolo o a lo menos culpa, en atención a la serie de negligencias, imprudencias, falta de acuciosidad y manipulación de la información periodística difundida y que sin piedad alguna vejó y destruyó mi imagen pública y privada, omitiendo entregar la información objetiva y conocida por los periodistas que demostraban mi inocencia, y la validez y legalidad de mi actuación profesional.

Finalmente alega que, Chilevisión como cualquier persona jurídica es responsable no solo de los ilícitos civiles en los que directamente interviene culpable o dolosamente, sino también, es responsable por las actuaciones de sus dependientes en los términos del artículo.

VI. El Derecho.

Sostiene que, el artículo 19 número 4 de la Constitución Política de la República señala que: “La Constitución asegura a todas las personas: N°4. El respeto y protección de la vida privada y honra de la persona y de su familia”. Además, el artículo 19 número 12, establece la responsabilidad correlativa para quienes ejercen la libertad de emitir opinión e información por los abusos en que incurran, tal y como sucedió en la especie con la demandada.

Afirma que, el artículo 2314 del Código Civil establece que: “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”. Asimismo, el artículo 2320 del mismo cuerpo legal señala que: “Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”, agregando en su inciso cuarto “Así los jefes de colegios y escuelas responden del hecho de los



Foja: 1

discípulos, mientras están bajo su cuidado; y los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices o dependientes, en el mismo caso”.

Expone que, la norma del artículo 2322 del Código Civil precisa que: “Los amos responderán de la conducta de sus criados o sirvientes, en el ejercicio de sus respectivas funciones; y esto aunque el hecho de que se trate no se haya ejecutado a su vista”. Asimismo, el artículo 2329 refiere que: “Por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta.”

Hace presente que, el artículo 1º de la Ley 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y ejercicio del Periodismo señala que: “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley.”

Finalmente, el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que: “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

VII. Daños causados a la demandante y titularidad para accionar.

Sostiene que, la actuación irresponsable, difamatoria y, a lo menos negligente, de la Red de Televisión Chilevisión S.A. ha provocado en la actora, graves daños que sufre hasta el día de hoy.

Afirma que, la actora es abogada titulada en la Universidad Adolfo Ibañez de la ciudad de Viña del Mar, con domicilio en Viña del Mar y toda una vida familiar, social, escolar y universitaria desarrollada en dicha comuna. Además, se desempeñó activamente en el poder judicial durante los años 2005 al año 2014 desarrollando labores como Oficial Primero en la Corte de Apelaciones de La Serena, como Oficial Tercero en el Juzgado del Trabajo de Valparaíso y como Abogado de apoyo en el Segundo Juzgado de Letras de San Antonio y en el Juzgado de Familia de San Antonio, realizando además suplencias en diversos tribunales de la región.

Agrega que, el desempeño de la actora con excelentes calificaciones y evaluaciones, tanto en el poder judicial, como en el poder legislativo, no solo permiten contextualizar su probidad laboral, sino también aquilatar la envergadura del daño que se ocasionó al cercenar a través de dicho



Foja: 1

reportaje difamatorio, mis posibilidades de reincorporación a alguna de dichas labores, teniendo en cuenta el prejuicio que instaló en los profesionales de la zona la andanada de imputaciones vejatorias que vertió la demandada con ocasión de su reportaje.

1. Lucro cesante que se demanda.

Expone que, a la fecha de los hechos, esto es, al día 7 de septiembre de 2016, la actora se encontraba contratada a honorarios como abogada por la Cámara de Diputados de Chile, con sede en el Congreso Nacional ubicado en la comuna de Valparaíso, trabajando como asesora parlamentaria del diputado por la Quinta Región don René Rodrigo González Torres.

Relata que, al día siguiente de la emisión del reportaje, es decir, el día 8 de septiembre de 2016, el diputado René Rodrigo González Torres, perteneciente a la Cámara de Diputados le puso abrupto término al contrato de prestación de servicios, cuestión que se encuentra acreditada mediante el documento denominado término de contrato de prestación de servicios a honorarios, tramitado con fecha 9 de septiembre de 2016. Asimismo, reitera que, el reportaje cuestionado se emitió el día 7 de septiembre de 2016 y el día 8 de septiembre de 2016, fue despedida de su cargo como asesora del diputado por pérdida de confianza.

Afirma que en la cláusula segunda del documento mediante el cual se puso término a los servicios se expresó: “Que se pone término al contrato de prestación de servicios personales individualizado en la cláusula precedente, de forma anticipada, bajo la causal establecida en la cláusula novena, letra d, del mismo, esto es: decisión unilateral del parlamentario fundada en la pérdida de confianza hacia el prestador de servicios”.

Agrega que, es un hecho indiscutido que el término abrupto del contrato de prestación de servicios se produjo inmediatamente al día siguiente de la emisión del reportaje y por pérdida de confianza, siendo una consecuencia directa de la emisión del mismo.

Manifiesta que, es evidente que el hecho ilícito civil incurrido por la demandada ocasionó que se pusiera término al contrato de prestación de servicios generando la pérdida de la legítima utilidad proveniente del ingreso derivado de su labor ante la Cámara de Diputados.

Describe que, como el término abrupto se produjo el 8 de septiembre de 2016, se privó de 66 meses de ingresos laborales, compuestos por los 18 meses que restaban para el término del período parlamentario del diputado René Rodrigo González (que vencía el 10 de marzo de 2018) y luego los 48 meses (4 años) correspondientes al período que va del 11 de marzo de 2018 al 10 de marzo del 2022, totalidad del período en el que con certeza habría



Foja: 1

desarrollado labores, pues durante los más de 3 años que la actora trabajó con el parlamentario solo cosechó buenas evaluaciones que habían motivado que se le pidiera continuar con su labor en los períodos parlamentarios siguientes.

Ahora bien, de acuerdo al contrato de prestación de servicios, la remuneración mensual dela actora, ascendía a la suma de \$600.000 (seiscientos mil pesos), razón por la cual, al realizar la operación aritmética de los meses de que fue privada por el monto del ingreso mensual, se evidencia un lucro cesante ascendente a la suma de \$39.600.000 (treinta y nueve millones seiscientos mil pesos), cantidad que se demanda a título de lucro cesante.

2. En cuanto al daño moral sufrido.

Señala previamente que, resulta atingente aludir a un fallo del Tribunal Constitucional que citando la obra Derecho Constitucional Chileno de don José Luis Cea Egaña ha señalado: “La honra, por ende, es la buena fama, el crédito, prestigio o reputación de que una persona goza en el ambiente social, es decir, ante el prójimo o los terceros en general, (...) Que, corolario de lo reflexionado en el presente capítulo es que el respeto y protección del derecho a la honra, que asegura la Constitución, es sinónimo del respeto y protección del buen nombre de una persona, derecho de carácter personalísimo que es expresión de la dignidad humana consagrada en su artículo 1º, que se vincula también con el derecho a la integridad psíquica de la persona, asegurado por el número 1 de su artículo 19, pues las consecuencias de su desconocimiento, atropello o violación, si bien, pueden significar en ocasiones una pérdida de carácter patrimonial más o menos concreto (si se pone en duda la honradez de un comerciante o de un banquero por ejemplo), la generalidad de las veces generan más que nada una mortificación de carácter psíquico, un dolor espiritual, un menoscabo moral carente de significación económica mensurable objetivamente, que, en concepto del que lo padece, no podría ser reemplazada o compensada con una suma de dinero. Se trata, en definitiva, de un bien espiritual que, no obstante tener en ocasiones también un valor económico, el sentido común señala que lo es todo para el que lo pierda y nada para el que lo quita”. (Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 10 de junio de 2008, en relación con el requerimiento por inconstitucionalidad en la causa rol 2429-2007, caratulada “Valdés con Irrarrazabal y otros” del Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago).

Sostiene que, en el caso de marras, no cabe duda alguna que la emisión de un reportaje en un noticiero central, difamando a la actora, como la abogada que estafó en 90 millones de pesos a unos ancianos le ocasionó un profundo impacto y un profundo shock emocional, afectando hondamente sus sentimientos y estado anímico.



Foja: 1

Agrega que, este reportaje abusivo fue emitido para todo el país, durante el pleno ejercicio de sus labores en el Congreso Nacional como asesora de un diputado, difundiendo vejatoriamente no solo su identidad como ser humano sino que destruyendo su vida profesional al atribuirle actuaciones fraudulentas realizadas en mi calidad de abogado. Estas imputaciones falsas y sin prueba fueron ventiladas en un noticiero central respecto de una abogada de provincia, lo cual significó ni más ni menos la aniquilación de su honra profesional, generando para siempre una desconfianza y mala imagen de su labor que le acompaña penosamente hasta el día de hoy.

Reitera que, a partir de la emisión de dicho reportaje, su honra y dignidad fue sepultada siendo humillada ante su familia, grupo social, compañeros de universidad, profesores de universidad, colegas del poder judicial, sus superiores y clientes. Es más, ningún ser humano merece ser depositario de una difamación tan brutal y sesgada como aquella de la que fue víctima. Además, la expresión “millonaria estafa de abogada”, o también, la publicación en internet de expresiones como “ancianos acusan que abogada los estafó”; mostrar imágenes de su rostro y nombre; acusar que la abogada que “estafó a los ancianos trabaja en el Congreso”, constituye una información falsa sin prueba seria, exponiéndola como una delincuente, fría y desalmada, cuestión que ha minado toda posibilidad de reinserción profesional, cambiando para siempre la vida profesional e imagen personal de la actora.

Manifiesta que, a consecuencia de lo anterior, la actora padece una profunda depresión de la que aún no se recupera, debiendo iniciar atenciones psicológicas con el objeto de buscar apoyo ante la angustia y tristeza que durante estos años le ha provocado innumerables momentos de llanto, labilidad emocional, fatiga, desgano ante las actividades cotidianas y un profundo desánimo ante la humillación pública de la que fue objeto. Lo anterior ha afectado hondamente su desempeño profesional y consecuentemente su vida económica. Hasta el día de hoy, la actora se encuentra con pocas posibilidades de ser reintegrada en alguno de los cargos que ocupó, a pesar de jamás haber sido acusada penalmente, condenada, ni atribuida algún tipo de responsabilidad por Juez alguno.

Expone que, la imputación en contra de la actora fue tan excesiva y virulenta que ha generado un inmenso daño en su imagen y desarrollo profesional, que ningún tribunal de la República o parlamentario la contratará nuevamente como abogada si se encuentra vinculada a un reportaje televisivo por estafa.

Advierte que, a tantos ámbitos se expandió el daño que le provocó la demandada que incluso, a la fecha de los hechos, la actora se desempeñaba como Presidenta del Comité de Administración del Condominio de Edificios



Foja: 1

Toscana, ubicado en la calle 3 oriente, N° 1270 de la comuna de Viña del Mar. Tan pronto se emitió el reportaje de Chilevisión, los co - propietarios citaron a un comité urgente y especial en el cual imputaron a la actora, falta de probidad para continuar ejerciendo la presidencia del comité, debido a las difamaciones de las que fue objeto en el reportaje de Chilevisión, forzándola a renunciar al cargo debido a las presiones y solicitudes de renuncia de que fue objeto.

Hace presente que, se ha establecido reiteradamente a nivel jurisprudencial, que a partir del artículo 2329 del Código Civil se ha desarrollado el principio de la reparación integral del daño, consistente en que todo daño debe ser reparado y en toda su extensión, de tal suerte que el demandante pueda quedar en la misma situación en que se encontraba si no hubiese sido víctima del daño causado por el hecho del demandado. Del mismo modo, nuestra legislación reconoce la existencia de un daño patrimonial constituido por una afección meramente patrimonial, en cuyo seno confluyen los conceptos de daño emergente y lucro cesante y el segundo constituido por aquellos padecimientos a bienes que carecen de significación patrimonial.

Reseña que, la doctrina ha sostenido que: “Estamos con aquellos que conciben el daño moral del modo más amplio posible, incluyendo allí todo daño a la persona en sí misma, física o psíquica, como todo atentado contra sus intereses extrapatrimoniales. Comprende pues el daño moral todo menoscabo del cuerpo humano, considerado como un valor en sí y con independencia de sus alcances patrimoniales. En suma, el daño moral estará constituido por el menoscabo de un bien no patrimonial que irroga una lesión a un interés moral por una que se encontraba obligada a respetarlo” (Domínguez Hidalgo, Carmen, El Daño Moral, Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, páginas 83 y 84).

Asegura que, resulta evidente que la difusión y exhibición de un reportaje en que (sin atribución judicial alguna de responsabilidad) se trató a la actora como delincuente, imputándole conductas de estafa y acciones fraudulentas basadas en información falsa y manipulada, le provocó un gravísimo daño moral que se expresó en un abierto desprestigio, deshonra y menosprecio que se extienden hasta el día de hoy en que cualquier ciudadano que digita en un buscador de internet el nombre completo de la actora, verá que está asociado al difamatorio reportaje elaborado por la demandada. De esta forma, el ilícito civil incurrido por la demandada menoscabó su dignidad personal, modificando para siempre mi vida profesional, afectando hondamente mis emociones sentimientos y mi vida privada y mis relaciones familiares, sociales.

Concluye señalando que, puesta en la posición de demandar por el inmenso daño moral que ha sufrido la actora a consecuencia de las acciones



«RIT»

Foja: 1

y omisiones dolosas, y a lo menos negligentes e imprudentes de la demandada, demanda una indemnización ascendente a la suma de \$400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos), cantidad que demando a título de daño moral.

Previas citas legales, finaliza solicitando tener por interpuesta demanda en juicio ordinario en contra de Red de Televisión Chilevisión S.A., sociedad del giro de su denominación, representada legalmente por don Jorge Carey Carvallo, abogado, ya individualizados, admitirla a tramitación, solicitando a S.S., que en definitiva declare:

- a. Que se acoge la demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de Red de Televisión Chilevisión S.A.;
- b. Que se condena a la demandada a pagar a favor de doña Carola Pamela Rivera Campusano, por concepto de indemnización de perjuicios por lucro cesante la suma de \$39.600.000.-; y por concepto de daño moral sufrido la suma de \$400.000.000.-, o las cantidades mayores o menores que se determinen de acuerdo a la ley o el mérito de autos;
- c. Que todas las sumas deberán ser pagadas con los pertinentes reajustes e intereses que legalmente procedan, calculados a contar de la fecha de la dictación de la sentencia definitiva y hasta la del pago efectivo de la indemnización o de la que S.S., estime procedente;
- d. Que la demandada deberá pagar las costas procesales y personales de la causa.

Con fecha 25 de abril de 2019, se notifica de conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, al representante legal de la parte demandada.

Con fecha 14 de mayo de 2019, la parte demandada opone la excepción dilatoria contemplada en el numeral 4 del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda, la que fue rechazada con fecha 21 de agosto de 2019 y se ordena dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil.

Con fecha 2 de septiembre de 2019, comparece don Carlos Emilio Toloza Eguiluz, abogado en representación de Red de Televisión Chilevisión S.A., contestando la demanda solicitando su rechazo por improcedente y carecer de sustento jurídico y fáctico, con expresa condenación en costas.



Foja: 1

Sostiene previamente que, la parte demandante intenta fundar su pretensión indemnizatoria, en relación con el reportaje periodístico informativo emitido por Chilevisión Noticias con fecha 7 de septiembre de 2016, el cual versaba sobre la autoría de un delito de estafa, perpetrado en la comuna de Villa Alemana y ejecutado en contra de 2 ancianos de dicha ciudad, coludiéndose supuestamente con uno de los hijos de ellos para perjudicarlos económicamente. En este sentido, sostiene la actora, se habría verificado un daño a su honra mediante la emisión de dicho reportaje, todo lo cual, supuestamente, daría lugar a la indemnización de perjuicios por parte de mi representada, bajo el concepto de daño moral, según las normas contempladas en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil conforme las reglas generales del estatuto de responsabilidad extracontractual.

I. Antecedentes Previos.

Afirma que, la Constitución Política de la República, consagra y asegura a todas las personas en su artículo 19 N° 12, el derecho o libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio. En el legítimo ejercicio de esta garantía constitucional, el reportaje realizado por mi representada se encuadra dentro del marco jurídico constitucional que lo regula.

Señala que, para dar ejecución y materialidad a esta garantía constitucional, la Ley N° 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo (en adelante “ley de prensa”), establece los derechos y deberes para el adecuado ejercicio de esta garantía. Dentro de estos derechos está el de informar a la opinión pública actos o hechos realizados por personas en el ejercicio de una profesión u oficio y cuyo conocimiento tenga interés público real.

Expone que, la función que tiene mi representada como medio de comunicación, entre otras cosas, es la de informar a la opinión pública sobre las diversas aristas políticas, institucionales y humanas que rodean el acontecer tanto nacional como internacional, de una manera imparcial y objetiva lo cual corresponde a una expresión de la función social de un medio de comunicación.

Agrega que, Chilevisión, en cumplimiento del rol social que se le confiere dentro de un sistema democrático de Derecho y en el ejercicio de la libertad de informar que le reconoce nuestra Carta Fundamental, abordó los hechos que fundan esta demanda, en virtud de que estos revertían características de interés público, dentro del ámbito de una denuncia realizada por una posible estafa sufrida por un matrimonio de ancianos.

II. Controversia de los hechos.



Sostiene que, el reportaje objetado es el resultado final de un trabajo desarrollado por un equipo de periodistas que, dieron a conocer a la opinión pública una denuncia de estafa perpetrada en contra de dos ancianos, hechos que revistieron un indudable interés público.

Afirma que, los hechos contenidos en la demanda corresponden a una interpretación absolutamente parcial y arbitraria de parte de la contraria, en particular respecto a la conducta de los periodistas de Chilevisión frente a los hechos reportados y registrados en la nota. En razón a esto último, resulta necesario para esta defensa, efectuar ciertas precisiones, de modo que S.S. pueda comprender el real contexto y desarrollo de los hechos cuestionados.

Expone que, la nota, corresponde a un trabajo periodístico serio y responsable, en el cual el equipo acudió directamente a la fuente. Un aspecto no menos importante del reportaje en cuestión es que los términos en los cuales es dada a conocer la noticia lo son siempre en carácter condicional, no presumiendo nunca la culpabilidad de la demandante en los hechos investigados. Así las cosas, no vislumbra esta parte, como pretende imputársele responsabilidad en la emisión de un reportaje, en el cual no ha cometido ninguna negligencia, y que en su esencia presentaba un interés público relevante, respecto del cual mi representada no sólo tiene el derecho de divulgarlo, en virtud del derecho a la Libertad de emitir opinión e informar, consagrado constitucionalmente en el artículo 19 N° 12 de nuestra Constitución, sino que tiene el deber de darlo a conocer a la opinión pública en su rol de medio de comunicación social.

III. Fundamentos de derecho alegados por el actor.

Sostiene que, la demanda interpuesta en contra de Chilevisión se basa, tal como lo señala la actora, en la supuesta perpetración de un cuasidelito civil, por haber actuado con culpa, es decir, con negligencia o con falta de cuidado, en la emisión de un reportaje periodístico que contendría expresiones que afectarían su honra.

Afirma que, en el mismo sentido y a propósito de los daños que dice haber sufrido, señala que el equipo periodístico de Chilevisión de manera negligente e irresponsable, realizaron una serie de acusaciones e imputaciones tendenciosas con la finalidad de enfatizar que era responsable.

Precisa que, en este orden de ideas, y abordando derechamente los fundamentos de la acción ejercida por la contraparte, éstos no cumplen siquiera con los mínimos requisitos que la ley exige para que la responsabilidad extracontractual se configure, razón por la cual se deberá rechazar la demanda en todas sus partes, con expresa condena en costas, puesto que es sabido que la responsabilidad extracontractual requiere de una acción u omisión por parte del agente, fuera del ámbito de las



Foja: 1

obligaciones de un contrato, y que tal acción u omisión se haya ejecutado con dolo o culpa, que la víctima haya sufrido un daño y que exista relación de causalidad entre la acción u omisión dolosa o culpable y el daño producido.

a. Sobre la inexistencia de una acción dolosa o culposa.

Expone respecto al primer requisito, esto es, la concurrencia de una acción culposa, que tanto en la legislación nacional como en el derecho comparado, la doctrina y jurisprudencia han establecido los parámetros normativos para hacer responsables a los medios de comunicación social respecto de una determinada información difundida, exigiendo de esta forma, que aquellos actos necesarios para concretar la realización de una publicación, emisión, o exhibición de una noticia, estén relacionados con una conducta inexcusablemente negligente o que, por otro lado, haya existido una intención o real malicia de provocar daño. En otras palabras, no bastará sostener la existencia de una determinada afectación o lesión de algún interés o derecho, por parte de quién se ve involucrado en una información eventualmente perjudicial, sino que se requiere, además, la motivación del informador respecto a ese específico resultado dañoso, de modo que “efectivamente se haya actuado con dolo o cuando se ha tenido una negligencia grave e injustificada en términos objetivos”

Advierte que, conforme a lo sostenido en la propia demanda, se debe descartar, desde ya, cualquier conducta dolosa por parte de su representada en la realización del reportaje, en atención a que es evidente que la difusión de la noticia cuestionada no se realizó, en caso alguno, con la intención o el ánimo de perjudicar a la persona de la Sra. Rivera en los términos del artículo 44 inciso final del Código Civil, que define al dolo como la “intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.

Indica que, las imágenes emitidas por Chilevisión formaron parte de una nota periodística informativa cuyo ámbito de discusión se circunscribió a la denuncia de una supuesta estafa sufrida por un matrimonio de avanzada edad. Dicha denuncia fue tratada en todo momento en términos condicionales y objetivos.

Hace presente que, es necesario pronunciarse respecto a la inexistencia de toda conducta negligente o imprudente que pudiera atribuírsele a mi representada, demostrando que, contrariamente a lo que se pretende sostener la demandante, Chilevisión actuó, en todo momento, con la debida diligencia, observando, de esta manera, los deberes de cuidado impuestos a todo medio de comunicación social para el libre ejercicio de la actividad informativa. Así las cosas, resulta evidente que a Chilevisión no podría habersele exigido algo más, en atención a que todas las directrices de



«RIT»

Foja: 1

un actuar diligente y cuidadoso, fueron satisfechas totalmente por mi representada.

Relata que, ante la existencia de hechos que revestían el carácter de interés público real, el equipo periodístico a cargo del reportaje en forma diligente agotó todos los medios a fin de recabar las distintas opiniones en los hechos investigados, siendo Chilevisión, como su función social lo señala, un medio de comunicación por el cual -en el legítimo ejercicio del derecho de libertad de expresión- dichas personas emitieron sus opiniones al respecto. Pero, como ya fue aclarado con anterioridad, en ningún caso esta demandada las dio por ciertas.

Afirma que, la inexistencia de toda conducta negligente o imprudente que pudiera atribuírsele a la demandada, se puede desprender fácilmente de acuerdo con la definición legal del artículo 44 del Código Civil que recoge la noción romana de culpa, construida en relación con patrones abstractos de conducta (el hombre de poca prudencia, el buen padre de familia y el hombre juicioso), alejándose así del concepto moral, asociado a la idea de reproche personal. Con todo, en el estatuto de la responsabilidad civil extracontractual, la culpa se aprecia en abstracto, y el grado de culpa por el cual se responde es culpa leve, pues las referencias del legislador a la culpa o negligencia en este ámbito son siempre genéricas (Art. 44 inc. 2º C.C.). En otras palabras, el estándar de conducta exigido se concreta en el estándar del buen padre de familia, es decir, en el empleo de un cuidado ordinario o mediano.

Señala que, queda claro que Chilevisión, al exhibir el reportaje en comento, realizó un tipo de conducta que se circunscribe en el ámbito de los actos autorizados por el derecho, es decir, al ejercicio legítimo de un derecho específico, a saber la libertad de expresión y el derecho a informar respecto de una situación de relevancia pública, según lo previsto en los artículos 19 N° 12 de la Constitución, y artículo n° 1 de la ley 19.733 Sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo.

Agrega respecto a las causales de justificación que actúan respecto del ilícito civil, el ejercicio legítimo de un derecho elimina toda forma de culpabilidad del sujeto que ha realizado la acción -siempre y cuando se haya ejercido dentro de los parámetros permitidos, cuestión que claramente procedió por parte de mi representada-. Su función, entonces, es servir de excusa razonable para el hombre prudente y cuidadoso, en el entendido de que se ha seguido los estándares de conducta previamente definidos por el legislador o contenido en usos normativos.

Manifiesta que, se puede sostener que cualquier consideración frente al eventual riesgo que pudiere haberse creado en algún sujeto pasivo de la información difundida – en la especie la Sra. Rivera alega tal calidad- ésta



Foja: 1

se ve superada por el consiguiente ejercicio legítimo de un derecho y por lo tanto elimina la ilicitud de la acción que causa el daño, si este finalmente llegare a crearse.

Denota que, del análisis de los hechos expuestos, no se desprende, en ninguna circunstancia, algún tipo de descuido o falta de diligencia en la forma de abordar el reportaje. Muy por el contrario, dicha nota de prensa se ajusta en todas sus partes, no sólo a la normativa jurídica aplicable, sino que también al Código de Ética del Colegio de Periodistas.

Finalmente, no existe ni puede existir, una actuación dolosa o culposa de la demandada, lo que en la doctrina se denomina ausencia de culpa en los hechos imputados, toda vez que Chilevisión actuó con la debida diligencia y cuidado en el tratamiento de la información emitida, al operar de acuerdo con los estándares básicos de un reportaje investigativo, en que se informa respecto de un hecho de interés público y general indiscutido. Por lo tanto, y operando la culpa civil como un juicio objetivo de la ilicitud de la conducta de acuerdo a la observancia de las exigencias típicas y objetivas de cuidado, no nos queda sino sostener que la conducta imputada a mi representada, en relación a la noticia emitida por el reportaje, correspondió a una conducta lícita en el ámbito del derecho de la libertad de expresión, razón por la cual, en el improbable caso de que S.S. estimare que existieron daños o perjuicios generados por la difusión de la noticia, el riesgo en la creación de éstos, se encontraría cubierto y permitido, justamente en virtud de tratarse de una conducta lícita ejecutada conforme a derecho.

b. Alcances.

Indica que, sin perjuicio de que el actor señala que su fundamento de derecho es el “cuasidelito civil” cometido por la demandada, en la especie, los hechos alegados -en el evento de ser efectivos, lo que niega- serían constitutivos del ilícito de injurias o calumnias, respecto a los cuales, ya sea que se ejerza la acción penal privada del delito de injurias y calumnias o se accione civilmente (como en este caso) para efectos de obtener una indemnización de perjuicios, en ambos casos se debe acreditar la comisión de dichos ilícitos.

Manifiesta que, lo anterior obliga necesariamente a analizar si es que la conducta desplegada por su representada satisface todos y cada uno de los elementos constitutivos de los tipos penales en cuestión. En este contexto el artículo 416 del Código Penal señala que: “es injuria toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona”.

Sostiene que, como todo tipo penal, desde la perspectiva de la tipicidad, éste contempla tanto elementos objetivos como subjetivos.



«RIT»

Foja: 1

Respecto a los primeros, esto es, las frases proferidas en dicho reportaje -como ya hemos señalado anteriormente- fueron manifestadas por las distintas personas a las cuales se entrevistaron. En ningún caso el periodista o el canal hacen suyas dichas afirmaciones y menos le atribuyen verosimilitud per se.

Afirma que, desde la perspectiva de la imputación objetiva, no es posible atribuirle responsabilidad alguna a mi representada toda vez que, de haberse materializado algún daño o perjuicio al demandado, la fuente de dicho daño o perjuicio no emana ni fue creada por Chilevisión, sino que como fue señalado anteriormente, por aquellas personas que profirieron dichas expresiones. En consecuencia, la conducta desplegada por Chilevisión no encuadra en la descripción de la conducta típica, ni es imputable objetivamente a ésta, por lo tanto, en ningún caso satisface la faz objetiva del tipo.

Agrega que, en relación con la faz subjetiva del tipo, sin duda que en doctrina tanto nacional como extranjera, es la que genera más discusión, y en el caso del tipo penal en estudio, es un elemento que cobra una relevancia significativa. Sin perjuicio de lo anterior, es pacífico en doctrina el hecho que el tipo penal en comento exige, para su consumación, al menos dolo directo, señalándose incluso por algunos autores y jurisprudencia nacionales que en los delitos de injurias y calumnias se requeriría un elemento subjetivo adicional además del dolo directo, a saber, el *animus injuriandi*. Más allá de este debate, lo que no se discute ni en doctrina ni en jurisprudencia, es que el delito de injurias, en ninguna circunstancia se podría satisfacer con dolo eventual y menos con culpa, sea ésta consciente o inconsciente.

Indica que, en el caso concreto, para entender consumado el delito y por ende dar lugar a la indemnización de perjuicios, se debe acreditar por parte de la demandante, que el actuar desplegado por mi representada, esto es, la emisión de la nota periodística en comento habría tenido como único y exclusivo objetivo afectar la honra de la demandante. Como S.S. podrá apreciar en la etapa procesal correspondiente, del reportaje en cuestión no es posible desprender de forma alguna lo señalado anteriormente, sino que, muy por el contrario, la nota tuvo por objeto informar a la opinión pública sobre un hecho de relevancia social.

Describe que, del reportaje se desprende en forma nítida la intención de Chilevisión de informar o dar a conocer una noticia (*animus narrandi*), el cual desplazaría el dolo o intención de injuriar (*animus injuriandi*). En consecuencia, no se configuraría en ninguna circunstancia el elemento subjetivo del tipo penal, como tampoco el elemento objetivo al cual hicimos referencia anteriormente, siendo por ende una conducta atípica, no



«RIT»

Foja: 1

existiendo por tanto delito alguno y menos, por ende, la obligación de indemnizar algún tipo de daño o perjuicio emanado de éste.

Alega en subsidio de lo anteriormente expuesto y en el evento de que S.S. considerara que la conducta realizada por mi representada pudiera considerarse típica, en ningún caso estamos aún ante un delito o cuasidelito. Toda vez que no basta con que una conducta, per se, pueda formalmente ser típica y configurar eventualmente un delito de injuria, toda vez que para que sea constitutiva de un ilícito esta debe además poner en riesgo o afectar materialmente el bien jurídico protegido sin estar esta conducta autorizada o justificada por el ordenamiento jurídico.

Señala que, en el caso de marras, podríamos estar presencia de un conflicto de bienes jurídicos, por una parte el derecho a la libertad de expresión y de información y por la otra el derecho al honor. En el caso concreto, nuestro ordenamiento jurídico en la eventualidad de considerar que la conducta desplegada fuera típica, en ningún caso la consideraría antijurídica, sino que, muy por el contrario, ajustada a derecho, toda vez que estaría amparada bajo la causal de justificación contemplada en el artículo 10 N° 10 del Código Penal, esto es, el ejercicio legítimo de un derecho.

Finalmente, a la luz de todo lo señalado anteriormente, y en el evento que US. considerara que en el caso de autos pudo haberse cometido injuria o calumnia, concluye por su parte que en ninguna circunstancia se habría configurado alguno de estos delitos, por lo que la demanda debe ser rechazada en todas sus partes.

c. Sobre la inexistencia del daño a la víctima.

Sostiene que, el daño demandado por la actora, esto es daño moral, no puede ser considerado como indemnizable por cuanto no cumple con los requisitos exigidos tanto por la doctrina como la jurisprudencia, a partir de las normas pertinentes del Código Civil.

Afirma, respecto a los requisitos que el daño sea cierto y personal, el daño moral solicitado por la demandante, que estima procedente por la presunta lesión de su honra, a consecuencia de la emisión del reportaje por parte de mi representada, solicita un monto de \$400.000.000.- el cual carece de todo fundamento, toda vez que este debe estar fundado en hechos concretos, y debe estar circunscrito a la existencia de un interés legítimo protegido vulnerado por una determinada acción u omisión.

Agrega que, lo que la demandante pretende es ser indemnizado por el supuesto daño o afectación causado a su honra, por el concepto de daño moral que dice haber sufrido, a causa del supuesto actuar negligente en la realización del reportaje de prensa en cuestión. En este sentido el artículo



Foja: 1

2331 del Código Civil dispone que “Las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero; pero ni aun entonces tendrá lugar la indemnización pecuniaria, si se probare la verdad de la imputación.”. La regla del artículo 2331 del Código Civil, constituye una disposición excepcional a la regla general de los artículos 2314 y 2329 del mismo Código, que establecen que todo daño injustamente causado da derecho a la consiguiente indemnización. La norma del artículo 2331 del Código Civil, establece la regla general en materia de indemnización de perjuicios en caso de que el daño se funde en una imputación injuriosa contra el honor o crédito de una persona, esto es, que por regla general, no procede indemnización alguna en estos casos, salvo que sea debidamente acreditado el daño emergente o el lucro cesante, y ni aún en estos casos cuando se probare la verdad de la imputación. Pero en ningún caso, es procedente la indemnización del daño moral. Así las cosas, cabe desestimar de plano la indemnización del daño moral solicitado por el actor, toda vez que la ya citada norma, excluye expresamente la reparación de otro tipo de daño que no sea el daño emergente y el lucro cesante. De este modo, aparte de descartarse que dichas imputaciones hayan sido injuriosas, pues gozaban de la más absoluta veracidad, se descarta de plano la indemnización por el daño moral que dice haber sufrido el actor.

Indica que, lo cierto es que no existe fundamento alguno que permita, plausiblemente, sostener la verosimilitud de la ocurrencia de algún tipo de daño sufrido por parte del de la demandante a causa del reportaje emitido por Chilevisión.

Expone que, en el supuesto hipotético de estimar que los perjuicios alegados, efectivamente acaecieron, dichos perjuicios en ningún caso se relacionan con alguna conducta de mi representada, por no existir una relación directa y necesaria entre un actuar inexistente de Chilevisión y los daños que se le puedan imputar en atención al reportaje en cuestión. Asimismo, en cuanto al lucro cesante que se demanda correspondiente a la supuesta privación de sesenta y seis meses de ingresos laborales, por un contrato de asesoría parlamentaria, dichos perjuicios en ningún caso se relacionan con alguna conducta de mi representada, por no existir una relación directa y necesaria entre un actuar inexistente de Chilevisión y los daños que se le puedan imputar en atención al reportaje en cuestión, careciendo en consecuencia de la causalidad entre hecho y daño, elemento fundamental de la indemnización.

Concluye señalando que, la indemnización millonaria pretendida, no tiene por objeto reparar daños, ya que éstos no existen, - y de existir, estos no han sido provocados de manera alguna por mi representada - sino que



Foja: 1

aprovecha una oportunidad para intentar efectuar una ganancia o utilidad ilegítima, lo que contradice todo nuestro sistema jurídico de responsabilidad, atendido la desproporcionalidad manifiesta en cuanto los montos alegados.

d. Sobre la inexistencia de una relación de causalidad entre la acción u omisión culpable o dolosa y el daño producido.

Sostiene que, respecto de la inexistencia de nexo causal, por otra parte, y además de las otras causales que demuestran la improcedencia de la demanda, la acción de responsabilidad extracontractual interpuesta por el demandante no puede prosperar por cuanto no cumple con otro de los requisitos de dicho estatuto de responsabilidad. En concreto, no existe relación de causalidad entre la conducta o acción que se le imputa a Chilevisión y los supuestos daños que la demandante dice haber sufrido.

Hace presente que, para fundamentar una relación de causalidad no basta atribuir en términos naturalísticos un determinado resultado dañoso a una acción en particular. En otras palabras, no basta realizar una supresión mental hipotética y señalar que, sin una determinada acción, un supuesto daño no habría ocurrido. Y ese test no basta porque entonces toda acción podría ser causa de todo daño.

Expone que, la doctrina ha creado la llamada “teoría de la causa adecuada”, según la cual para que un daño resulte indemnizable, no basta que pueda atribuirse mentalmente a una causa en particular, sino que se precisa de criterios normativos adicionales que demuestren que ciertos daños se han producido, desde el punto de vista de un observador imparcial, por una causa que resulta especialmente verosímil. En otras palabras, lo determinante a efectos de establecer una relación de causalidad es la aptitud potencial que tiene un hecho culpable para producir daño.

Afirma que, a simple vista, y por los argumentos señalados en los acápites anteriores, no existe y no puede existir una relación de causalidad entre hechos inexistentes por parte de Chilevisión, y los supuestos daños alegados por la contraria.

Agrega que, bajo ningún respecto puede considerarse que existe un vínculo o nexo de causalidad entre los daños que dice haber sufrido el actor y la supuesta conducta ilícita atribuida a mi representada, toda vez que jamás Chilevisión ha incurrido en las conductas que se le atribuyen, esto es, falsear, manipular o adulterar la información entregada. Al entender que no existió condición necesaria y directa sobre algún tipo de daño, ya que nunca existió una acción o conducta de mi representada capaz de provocarlos, no puede sostenerse que concurre en este caso el elemento de la causalidad, necesaria para que proceda la indemnización de perjuicios en sede extracontractual.



Foja: 1

Refiere que, la principal causa del daño que alega haber sufrido la demandante, es su propio comportamiento o bien los dichos o la conducta del denunciante. Esa es la causa adecuada del daño y no otra. Es debido a ello que la demanda interpuesta en contra de Chilevisión resulta ser nuevamente improcedente.

Reitera que, la demanda debe rechazarse en todas sus partes, ya que, como ha quedado demostrado fehacientemente por esta demandada a lo largo de esta presentación, no han existido daños atribuibles a mi representada; no ha existido en caso alguno, un actuar imprudente en la difusión de la información contenida en el reportaje aludido; menos aún, se ha establecido una relación de causalidad entre la conducta de Chilevisión, con los supuestos perjuicios reclamados en autos. En otras palabras, no concurre en la especie la indemnización de los perjuicios alegados en la demanda, toda vez que se demostró que la conducta de mi representada no es constitutiva de delito o cuasi delito civil, conforme a todos los antecedentes expuestos.

Finalmente, en el ámbito de informar a la opinión pública sobre hechos noticiosos de relevancia pública real, resulta razonable concluir que la demanda civil, en el tenor de lo citado, es improcedente e infundada, por lo que debe ser rechazada en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Con fecha 1 de octubre de 2019, la demandante evacúa el trámite de la réplica en los siguientes términos.

Sostiene que, en el acápite de la contestación de la contraria referido a los antecedentes previos, ésta afirma que el reportaje respecto de la actora, se emitió “encuadrándose en el marco jurídico”, afirmando a continuación que es función de Chilevisión informar a la opinión pública de una manera “imparcial y objetiva”. De este modo, sobre las afirmaciones precedentemente expuestas manifestamos nuestro total rechazo, toda vez que es precisamente debido a que el reportaje emitido por el canal Chilevisión fue emitido fuera de todo marco jurídico y de manera abusiva, que se genera la responsabilidad civil que se demanda.

Afirma que, el marco jurídico al que apela la demandada no la facultaba para emitir imputaciones ligeras y en donde la fuente de la denostación pública jamás provino de los entrevistados, de algún fiscal o autoridad, sino que la denostación provino del propio canal mediante atribuciones de delitos efectuadas por la voz periodística y por las huinchas o bandas que acompañaron todo el reportaje, expresiones que jamás profirieron las supuestas víctimas. Asimismo, tampoco es posible hablar seriamente de un reportaje imparcial y objetivo.



Foja: 1

Relata que, el canal omitió entrevistar a la Fiscal que llevaba el caso; tampoco fueron a entrevistar al Notario o funcionarios notariales que autorizaron la documentación reprochada en el reportaje; y por otra parte, a sabiendas de que la actora contaba con asesoría jurídica letrada, mal intencionadamente el canal decidió cercenar la entrevista realizada a su abogado, optando eso sí por entrevistar a quien representaba a los “supuestos” denunciantes, que a la sazón fue individualizado en el reportaje como abogado, en circunstancias que a la fecha del mismo no era abogado. Por cierto, sobre esta situación la demandada guardó silencio en su contestación, manteniéndose sin explicar por qué se hizo figurar como abogado a alguien que no lo era para acusar a mi patrocinada y callar la versión de su defensa.

Manifiesta que la demandada afirma que el trabajo periodístico corresponde a un trabajo serio y responsable en el cual el equipo acudió directamente a la fuente, ocupando términos en condicional. Sin embargo, resulta irritante leer las afirmaciones precitadas destacando la existencia de un reportaje serio y responsable, agregando luego que los términos en que se da la noticia es siempre en condicional. Sin duda manifiesta que el abogado de la contraria no vio el reportaje, puesto que, desde el minuto 1:00 hasta el final del reportaje, en el horario de mayor sintonía televisiva, y mientras se muestran imágenes acompañadas de una música fúnebre, se muestra una vistosa huincha o banda en el centro de la pantalla de color rojo y blanco que afirmó: “millonaria estafa de abogada. Trabaja en Congreso Nacional”. Por esta razón, solicito a la demandada que explique en su dúplica que parte de la redacción entrecomillada fue difundida por el serio equipo periodístico en términos condicionales.

Expone que, ninguno de los querellantes Luis Vega Vega ni Victoria Elkins profirieron expresión ni imputación alguna en contra de la profesional y allí radica una nueva gravísima negligencia del tendencioso reportaje, la única fuente directa estaba constituida por quienes figuraban como supuestos afectados, sin embargo ninguno de ellos imputó a la demandante limitándose sus expresiones a reprochar únicamente la conducta de su hijo Oscar Vega Elkins.

Advierte que, tan negligente fue la actuación de la demandada, que en el minuto 4:24 afirman en horario prime que la abogada rivera “se quedó con treinta millones de pesos y los restantes sesenta se los entregó a Oscar Vega Elkins, el hijo de los ancianos”. En este punto el reportaje ya entra derechamente en el plano difamatorio toda vez que el periodista manipula la información deteniéndose en que la abogada se quedó con 30 millones, omitiendo informar a la opinión pública que esos 30 millones de pesos que menciona correspondían a un porcentaje acordado en un pacto de honorarios suscrito por los clientes de la profesional (que incluso le



Foja: 1

permitía obtener a título de cuota litis incluso una suma mayor), con fecha y con firmas que jamás fueron desvirtuadas. De este modo, Chilevisión tomó la deliberada decisión de hablar de una estafa y no de un contrato de prestación de servicios firmado por los contratantes con mi patrocinada ya que esto último, no tendría ningún impacto digno de transmitirse en horario prime de la Televisión Chilena.

Alega que, los demandados aseveran la inexistencia de toda conducta negligente y culposa, no desprendiéndose algún descuido o negligencia en la forma de abordar el reportaje, sosteniendo además el ejercicio legítimo del derecho. Sin embargo, se trata de afirmaciones huérfanas de sustento y contradichas por el propio reportaje dañoso. En efecto, el reportaje fue gravemente negligente:

- i. Jamás se habló en términos condicionales y la banda que cruzó la pantalla televisiva durante todo el reportaje afirmaba “Miillonaria estafa de abogada. Trabaja en Congreso Nacional”. Afirmando categóricamente que la actora estafó en millones a dos personas;
- ii. Que la afirmación anterior fue difundida sin un trabajo de indagación serio, profesional, omitiendo la fuente más objetiva de todas, constituida por el Ministerio Público. En suma, se trató de una imputación avalada por la voz del periodista, formulada sin pruebas serias, sin entrevista a algún Fiscal, algún funcionario de la PDI, a algún perito de la brigada de delitos económicos, a algún funcionario de tribunal, etc;
- iii. Extrajeron fotografías de la actora de sus redes sociales, obtuvieron información de ella desde el congreso, se extrajeron imágenes de ella en actividades familiares, y todo para difamarla;
- iv. Se presentó como abogado de la parte acusadora a una persona que no tiene por nombre el que aparece en el reportaje ya que la persona que los reporteros difundieron como abogado no lo era;
- v. Se cercenó la entrevista del abogado de la demandante, omitiendo no solo su entrevista sino la referencia a la documentación exhibida ante el canal.

Finalmente, señala que el equipo periodístico a cargo del reportaje tuvo a su disposición diversos elementos y antecedentes para difundir con un estándar profesional, serio y objetivo la información sobre el caso en qué participó mi patrocinada. Sin embargo, optó por razones que desconocemos, por omitir información, cercenar testimonios, no acudir a la fuente autorizada (Fiscalía), y afirmar de manera categórica una serie de imputaciones que fueron generadas por el canal y no por quienes legalmente tenían el carácter de supuestas víctimas.



Con fecha 7 de octubre de 2019, la demandada evacúa la réplica en los siguientes términos.

Sostiene que, en su escrito de réplica la contraria se limita a reprochar el actuar de esta parte en cuanto a la forma en que fue tratado el reportaje. En dicho contexto, uno de sus principales argumentos dice relación con una supuesta falta de objetividad del reportaje por no haber entrevistado a determinadas personas o, por otro lado, haber indicado que se entrevistaba al abogado de quienes denunciaban la estafa, sin que este lo fuera. Sin embargo, en relación a la última de las alegaciones, huelgan las palabras desde que dicha aseveración – que en nada dice relación con este juicio – no puede ser un factor a observar para la posible determinación de un daño.

Afirma que, si se considera que la demandante alega en su réplica la falta de entrevista a determinadas personas, es decir, la demandante solicita que se fije como estándar que esta parte necesariamente debió incorporar a determinadas personas. Lo anterior claramente es una vulneración patente del derecho a la libertad de expresión, toda vez que lo que se busca es obligar de forma indirecta al medio de comunicación a entregar determinados puntos de vista, propendiendo hacia el establecimiento de un modelo de “reportaje tipo” en el cual necesariamente se deba incluir todos los puntos de vista que puedan existir.

I. Respecto del hecho del cual deriva el daño.

Afirma que, la demanda de la contraparte esgrime como uno de los fundamentos de su demanda la ley de prensa N° 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo. Con todo, comete un error de fundamento toda vez que dicha normativa establece en sus artículos 39 y 40 como fundamentos de hecho para la persecución de la responsabilidad tanto penal como civil la comisión de los ilícitos de injurias y calumnias. En efecto señalan los respectivos artículos:

“Artículo 39.- La responsabilidad penal y civil por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de las libertades que consagra el inciso primero del número 12° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, se determinará por las normas de esta ley y las de los Códigos respectivos. Se considerará también autor, tratándose de los medios de comunicación social, al director o a quien legalmente lo reemplace al efectuarse la publicación o difusión, salvo que se acredite que no hubo negligencia de su parte.”

“Artículo 40.- La acción civil para obtener la indemnización de daños y perjuicios derivada de delitos penados en esta ley se regirá por las reglas generales. La comisión de los delitos de injuria y calumnia a que se refiere



Foja: 1

el artículo 29, dará derecho a indemnización por el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral.”

Describe que, el artículo 29 de la ley en comento nos remitirá al análisis de los delitos de injurias y calumnias, lo que en el caso concreto nos lleva a concluir ineludiblemente que el actuar desplegado por mi representada no habría tenido como objetivo afectar la honra de la demandante, tal como se ha logrado establecer en la contestación presentada por esta parte. En efecto, aun cuando la contraparte se esmera en atribuir a la demandada un actuar derechamente doloso, al invocar el estatuto de la ley 19.733 no hace más que establecer de forma indirecta responsabilidad por los delitos de injurias y calumnias, hecho que resulta del todo claro – según lo señalado– que dicha imputación no se han logrado acreditar careciendo por tanto de fundamento.

II. Respecto al análisis de los diversos elementos de la responsabilidad civil.

Sostiene que, se ha reiterado que la contraparte no ha logrado estructurar un argumento relativo a la eventual posibilidad de cometer el delito de injurias y calumnias culposa, toda vez que de los análisis ya realizados por esta parte en reiteradas ocasiones, ésta no se ha logrado configurar.

Relata que, la actora arguye como pilar de su demanda de responsabilidad civil extracontractual la manifiesta falta de diligencia y absoluta irresponsabilidad, en la forma en que se emitió esta información corresponderá a la demandante entonces argumentar en qué sentido dicha conducta ha sido negligente, es decir, construir un argumento basado en la culpabilidad de esta parte, el cual siquiera ha sido someramente tratado por la contraparte.

Afirma respecto al nexo causal, la actora sólo se remite a mencionar la supuesta existencia de un vínculo causal sin desarrollarlo en ninguno de sus escritos de discusión, es decir, la demandante realiza una especie de presunción del nexo causal no estableciendo siquiera una mención a como dicho nexo causal se configuraría en el caso. En efecto, tal como se ha señalado con anterioridad, no basta con realizar una supresión mental hipotética y señalar que sin una determinada acción un supuesto daño no habría ocurrido, teoría que en el derecho moderno se encuentra mayoritariamente abandonada, toda vez que bajo su alero toda acción podría ser causa de todo daño, creando una regresión temporal infinita de causas para un daño determinado. En suma, la causalidad actúa como elemento o requisito de la responsabilidad civil, exigiendo que el hecho sea condición necesaria del daño, pero a la vez funciona como límite de dicha responsabilidad, pues no bastará una relación puramente descriptiva, sino



Foja: 1

que además se exige una apreciación normativa para calificar al daño como consecuencia directa del supuesto hecho ilícito.

Concluye señalando que, la doctrina jurídica ha buscado desde sus inicios crear criterios y teorías que tiendan a definir dicha relación directa que se expresan en diversas teorías entre las cuales podemos encontrar la teoría de la causa adecuada, la cual ha sido correcta y extensamente abordada por esta parte en el escrito de contestación de la demanda.

III. Respecto de la procedencia del daño moral.

Afirma que, el artículo 2331 del Código Civil (que rige en plenitud en casos de responsabilidad civil) señala con claridad que “las imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero, pero ni aun entonces tendrá lugar la indemnización pecuniaria, si se probare la verdad de la imputación”, en consecuencia, dicho artículo excluye claramente la indemnización del daño moral en caso que el daño se funde en una imputación injuriosa contra el honor o crédito.

Advierte que, es necesario preguntarse entonces, en el supuesto de aceptar que la contraparte invoca solo la acción civil por ilícitos, si es posible reclamar la indemnización por el daño moral. La respuesta es a todas luces negativa puesto que si se ejerce solo la responsabilidad civil corresponderá aplicar las normas generales contenidas en nuestro código civil en donde recibirá plena aplicación el artículo 2331 de dicho cuerpo normativo.

Agrega que, no existen motivos de derecho para entender que la norma del artículo 2331 será inaplicable al caso por ser contraria a la Constitución Política de la Republica, toda vez que al recurrirse al estatuto civil de responsabilidad extracontractual debe estarse las normas generales contenidas en nuestro código civil en donde recibirá plena aplicación el artículo 2331 que excluye expresamente dicha indemnización.

Finalmente, queda de manifiesto que la contraria no ha logrado argumentar con claridad la forma en la cual se podría atribuir cierta responsabilidad a nuestra representada, no haciéndose parte siquiera de los elementos más elementales para la configuración de la responsabilidad extracontractual de conformidad a las normas generales. A mayor abundamiento, no puede sino rechazarse la pretensión indemnizatoria de la contraparte toda vez que el artículo 2331 del Código Civil excluye expresamente la procedencia del daño moral.



«RIT»

Foja: 1

Con fecha 26 de noviembre de 2019, se llevó a efecto la audiencia de conciliación, con la asistencia de la demandante debidamente representada y el abogado patrocinante de la demandada, sin producirse acuerdo.

Con fecha 4 de diciembre de 2019, se recibió la causa a prueba, modificándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos por resolución de 23 de abril de 2020, rindiéndose la prueba documental y testimonial que consta en autos.

Con fecha 15 de abril de 2020, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 22 de enero de 2019, comparece doña Carola Pamela Rivera Campusano, abogada, deduciendo demanda de indemnización de perjuicios a Red de Televisión Chilevisión S.A., sociedad del giro de su denominación, representada legalmente por don Jorge Carey Carvallo, abogado, ya individualizados, en atención a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho consignados en lo expositivo de la presente sentencia.

SEGUNDO: Que la demandada contestó la demanda, solicitando su rechazo, en los términos señalados en lo expositivo de la presente sentencia.

TERCERO: Que luego de recibir los escritos de réplica y dúplica, se llevó a cabo la audiencia de conciliación sin lograr acuerdo, por lo que se recibió la causa a prueba, la que luego de ser modificada mediante resolución de la Ilustrísima Corte de Santiago, fijó como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los que debía recaer, los siguientes:

1. Efectividad que la demandada en la franja denominada “Reportaje a fondo” del Noticiero Central del canal Chilevisión, emitida con fecha 7 de septiembre de 2016, atribuyó a la demandante la comisión de hechos ilícitos. En su caso, hechos imputados y si estos corresponden a la realidad;
2. Efectividad de existir una conducta dolosa o negligente por parte de la demandada en la emisión del reportaje referido precedentemente;
3. Efectividad que la demandante ha sufrido perjuicios como consecuencia del actuar de la demandada. en la afirmativa, naturaleza y monto de los perjuicios;
4. Relación de causalidad entre la conducta de la demandada y los perjuicios demandados.

CUARTO: Que la demandante, a fin de acreditar sus dichos, rindió prueba documental, consistente en:



Foja: 1

1. Copia de Certificado de Nacimiento, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, con fecha 22 de enero de 2019, de doña Carola Pamela Rivera Campusano;
2. Certificado de título de abogada, de fecha 22 de enero de 2019, de doña Carola Pamela Rivera Campusano;
3. Copia simple de contrato de prestación de servicios a honorarios, celebrado con fecha 19 de enero de 2016 entre Pablo Ernesto Oneto García, Subsecretario Administrativo de la Cámara de Diputados y doña Carola Pamela Rivera Campusano;
4. Certificación del Notario Público de Valparaíso doña Sonia Ravanal Toro, de fecha 7 de septiembre de 2017, relativo a la búsqueda de la frase “abogada Carola Rivera Campusano en el sitio web www.google.cl;
5. Copia simple del término de contrato de prestación de servicios, celebrado con fecha 9 de septiembre de 2016, entre Pablo Ernesto Oneto García, Subsecretario Administrativo de la Cámara de Diputados y doña Carola Pamela Rivera Campusano;
6. Certificación de doña Sonia Ravanal Toro, Notario Público de Valparaíso, respecto al enlace de la página web de CHV Noticias, denominada “Ancianos acusan que su hijo los estafó con 90 millones”, con fecha 7 de septiembre de 2017;
7. Certificado emitido por el Director de Finanzas Subrogante de la Cámara de Diputados, don Patricio Leiva Valdés, con fecha 10 de marzo de 2015;
8. Resolución exenta N° 000158 – 2013, dictada con fecha 22 de Mayo de 2013, dando cuenta del nombramiento como Oficial Primero de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena en calidad de suplente externo, entre los días 2 al 24 de mayo de 2013;
9. Resolución exenta N° 115 – 2014, dictada con fecha 29 de enero de 2014, dictada por la oficina de personal de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, dando cuenta del nombramiento como Oficial tercero en calidad de suplente en el 2° Juzgado de Letras de San Antonio;
10. Certificado N° 72, emitido con fecha 9 de julio de 2013, por don Humberto Anabalón Guerrero, Encargado Departamento de Personal, Corporación Administrativa Poder Judicial Valparaíso;



11. Informe de desempeño de personal transitorio, correspondiente al periodo comprendido entre el 2 y 28 de enero de 2012, emitido por la Magistrado Subrogante doña Marcela Osorio Páez, del 2º Juzgado de Letras de San Antonio;
12. Informe de desempeño de personal transitorio, correspondiente a 32 días a contar del 5 de marzo de 2012, emitido por el Juez Titular del Primer Juzgado Civil de Viña del Mar, don Miguel Antonio Montenegro Rossi;
13. Informe de desempeño de personal transitorio, correspondiente al periodo comprendido entre el 17 de octubre al 2 de noviembre de 2011, emitido por el Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras de San Antonio don Juan Tudela Jiménez;
14. Informe de desempeño de personal transitorio, correspondiente al cargo de Oficial Tercero en calidad de suplente, emitido por el Juez Titular del 2º Juzgado de Letras de San Antonio, don Juan Tudela Jiménez;
15. Hoja de Calificación, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2005 y el 31 de octubre de 2006, emitido con fecha 15 de diciembre de 2006, por la Juez Subrogante del Primer Juzgado del Trabajo doña Lilian Saéz Limari;
16. Copia simple del informe de evaluación de daño, emitido con fecha 4 de marzo de 2019, por la psicóloga Viviana Celis Corrales;
17. Copia simple del carnet de Asesora Segunda Vicepresidencia de doña Carola Rivera Campusano;
18. Boleta de Honorarios N° 61, emitida con fecha 15 de mayo de 2016, por doña Carola Pamela Rivera Campusano, por la suma de \$600.000.-;
19. Boleta de Honorarios N° 62, emitida con fecha 19 de junio de 2016, por doña Carola Pamela Rivera Campusano, por la suma de \$600.000.-;
20. Boleta de Honorarios N° 63, emitida con fecha 19 de julio de 2016, por doña Carola Pamela Rivera Campusano, por la suma de \$600.000.-;
21. Boleta de Honorarios N° 64, emitida con fecha 22 de agosto de 2016, por doña Carola Pamela Rivera Campusano, por la suma de \$600.000.-;



«RIT»

Foja: 1

- 22.Liquidación de remuneraciones, correspondiente al periodo junio 2014;
- 23.Liquidación de remuneraciones, correspondiente al periodo julio 2014;
- 24.Acta de audiencia de comunicación no perseverar en el procedimiento, de fecha 27 de julio de 2017, en los autos RIT N° 749 – 2016, seguidos ante el Juzgado de Garantía de Villa Alemana;
- 25.Copia simple del acta de asamblea ordinaria de copropietarios Comunidad Edificio Toscana, de fecha 16 de octubre de 2017, ante Notario Público Titular de la Notaría de Viña del Mar;
- 26.Correo electrónico dirigido a los copropietarios del Condominio Toscana, emitida con fecha 9 de septiembre de 2016;
- 27.Copia simple del contrato de prestación de servicios de fecha 13 de marzo de 2015, entre don Óscar del Carmen Vega Elkins y doña Carola Pamela Rivera Campusano;
- 28.Captura fotográfica del sitio web de Red de Televisión Chilevisión S.A., correspondientes a los días 19 de diciembre de 2019 y 4 de enero de 2020;
- 29.Copia simple de reclamación de fecha 28 de septiembre de 2016 dirigida a Red de Televisión Chilevisión S.A.;
- 30.Acuerdo celebrado con fecha 7 de octubre de 2015 ante Notario Público Titular doña Eliana Gabriela Gervasio Zamudio, de la Notaría de Viña del Mar, repertorio N° 6109, entre Inmobiliaria e Inversiones Puerta del Sol SpA y don Luis Alberto Vega Vega y otra;
- 31.Denuncia de 3 de febrero de 2017 respecto del delito de ejercicio ilegal de la profesión de don Luis Zúñiga Barrera;
- 32.Declaración de don Eduardo Dorosmán Álvarez Echeverría de fecha 4 de septiembre de 2017;
- 33.Set de 8 fotogramas, correspondientes al reportaje emitido con fecha 7 de septiembre de 2016 en el noticiero central “Chilevisión Noticias”
- 34.Copia simple del certificado de título de don Luis Jorge Zúñiga Barrera, de fecha 29 de mayo de 2017.

QUINTO: Que con fecha 4 de febrero de 2020, rolante a fojas 50, la parte demandante acompañó documento electrónico consistente en un



«RIT»

Foja: 1

disco compacto y un pendrive, custodiado bajo el N° 1187 - 2020, consistente en copia de video en formato AVI correspondiente a la emisión de “Reportaje a Fondo”, del noticiero central de Chilevisión Noticias horario prime.

SEXTO: Que, por solicitarlo con fecha 4 de febrero de 2020, la parte demandante, se llevó a cabo audiencia de percepción documental, con fecha 5 de marzo de 2020, rolante a folio 72, en el que se exhibió el video de 10 minutos y 15 segundos, consistente en la emisión de “Reportaje a Fondo”, incluido en el noticiero central de “Chilevisión Noticias” el día 7 de septiembre de 2016.

SÉPTIMO: Que la parte demandante, además, rindió prueba testimonial consistente en las declaraciones de don Silvio Emilio Chueca Toledo, don Rodolfo Braulio Maturana Mancilla y doña Viviana Soledad Celis Corrales.

Que don Silvio Emilio Chueca Toledo, fue interrogado al tenor de los puntos de prueba número 1, 2, 4 y 5. Respecto a si la demandada en la franja denominada “Reportaje a fondo”, atribuyó a la demandante la comisión de hechos ilícitos, señala que Chilevisión le imputa a doña Carola Rivera Campusano, los delitos de estafa y de apropiación indebida, en el reportaje emitido el día 7 de septiembre de 2016, que no corresponden a la realidad y son falsos, siendo que fue emitido dos meses antes que formalizaran a la actora, respecto del cual se estableció el plazo de sesenta días para investigar, determinando la Fiscalía no perseverar en la investigación. Asimismo, afirma que los hechos tienen connotación pública, puesto que la demandante trabajaba como asesora jurídica de la Vicepresidencia de la cámara de Diputados y para el diputado Rodrigo González.

Repreguntado, agrega que se formularon imputaciones por escrito como “estafa y apropiación indebida”, pero que cuando se busca en la página web de google el nombre de la actora, aparece el reportaje y una frase “los documentos que dieron origen a todo esto son fraudulentos”. Asimismo, sostiene que, durante el reportaje jamás se entrevistó a algún fiscal del Ministerio Público, funcionario de la PDI o Carabineros.

Respecto a la existencia de una conducta dolosa o negligente por parte de la demandada, afirma que el reportaje emitido por Chilevisión fue doloso, por no ajustarse a la verdad, debido a la inexistencia de antecedentes que garanticen la seriedad de éste. Asimismo, se emitieron juicios que perjudicaron la honra de la demandante, a pesar que ella fue absuelta de todo cargo.

Repreguntado, señala que el actuar doloso y/o negligente se tradujo en la emisión de juicios antes de la formalización de la investigación, no



«RIT»

Foja: 1

existiendo una causa vigente en contra de la demandante, y el perjuicio causado por este hecho, emitiendo un reportaje que no era efectivo.

Preguntado respecto a si la demandante ha sufrido perjuicios, afirma que éste es enorme, lo que se traduce en la destrucción total de su imagen profesional y personal, familiar y social, puesto que tuvo que dejar de trabajar, obligándola a renunciar a los cargos que tenía de representatividad, inclusive siendo funada por los copropietarios del Condominio en el que vive. Además, a consecuencia de ello, debe acudir a constantemente a un tratamiento psicológico. Por último, en cuanto al monto de los perjuicios, afirma que estos ascenderían a la suma entre quinientos a seiscientos millones de pesos, porque hay que considerar el sufrimiento de sus familiares directos e indirectos.

Repreguntado, señala que producto del reportaje fue desvinculada de su trabajo en la Cámara de Diputados, cuya causa fue la pérdida de confianza.

En cuanto a la relación de causalidad entre la conducta de la demandada y los perjuicios demandados, afirma que, todos se produjeron debido al reportaje emitido por Chilevisión.

Que don Rodolfo Braulio Maturana, fue interrogado al tenor de los puntos de prueba número 1, 4 y 5. Respecto a si la demandada en la franja denominada “Reportaje a fondo”, atribuyó a la demandante la comisión de hechos ilícitos, señala que el 7 de septiembre de 2016, se emitió un reportaje en las noticias de la noche, en el que se dos abuelitos hacían mención que su hijo los había estafado y se acusaba a una abogada llamada Carola Rivera del delito de estafa y apropiación indebida de dineros, en donde el periodista y los entrevistados afirmaban con certeza la comisión del delito.

Repreguntado, afirma que en el reportaje se exhibió el nombre completo de la demandante, señalando que trabajaba con el diputado Rodrigo González en la Cámara de Diputados, y fotografías familiares. Asimismo, señala que se le imputaba a la demandante la calidad de autor material del delito de estafa y de apropiación de dineros.

Preguntado respecto a si la demandante ha sufrido perjuicios, afirma que doña Carola Rivera Campusano y su familia directa e indirecta, ha sufrido perjuicio debido a la emisión del reportaje emitido por Chilevisión S.A. Además, la demandante fue profesionalmente perjudicada al perder su trabajo con el diputado Rodrigo González, su honra e imagen profesional, toda vez que no ha podido reinsertarse laboralmente, y también daño emocional, encontrándose en constante control médico. Por último, sostiene que los perjuicios se pueden evaluar en la suma de cuatrocientos a quinientos millones de pesos.



Foja: 1

Finalmente, en cuanto a la relación de causalidad entre la conducta de la demandada y los perjuicios demandados, afirma que, existe una relación directa, puesto que el famoso reportaje sigue vigente. Además, dañó y destruyó su imagen profesional y personal. Asimismo, fue afectada su familia, puesto que se cuestionó su honra al imputarle delitos que no fueron efectivos y que en esas fechas no eran verdaderos ni chequeados por Chilevisión.

Que doña Viviana Soledad Celis Corrales, fue interrogado al tenor de los puntos de prueba número 4 y 5. Respecto a si la demandante ha sufrido perjuicios como consecuencia del actuar de la demandada, afirma que la actora presenta daño psicológico. Sostiene que a partir de la evaluación psicológica realizada en el mes de agosto y septiembre de 2018, pudo determinar la existencia de daño psicológico compatible con la exposición mediática a que fue expuesta a partir de la emisión del reportaje en el noticiero central de Chilevisión, en la franja denominada reportaje a fondo, con fecha 7 de septiembre de 2016. Además, padece estrés agudo compatible con haber vivido una situación de características traumáticas, cuya significación permanece a la fecha, en la medida que no ha podido posicionar la experiencia en tiempo pasado, reviviendo continuamente esta última a partir de eventos que encuentren algún grado de similitud con el trauma original, generándole sentimientos de indefensión, angustia y adoptando una postura evitante cuyo fin es disminuir la intensa angustia que le genera no poder controlar las consecuencias psicológicas de dichos eventos.

Señala que, el reportaje generó sentimiento de descontrol, puesto que la demandante puede ser enjuiciada nuevamente sin el derecho de dar explicaciones ante los juicios de terceros, sintiéndose estigmatizada. Asimismo, padece una depresión subclínica expresando sentimientos de tristeza permanente y apatía, configurándose progresivamente en un elemento estable de su personalidad y en consecuencia, un daño a largo plazo. Agrega que, el reportaje tuvo consecuencias en el ámbito laboral, debiendo dar un giro inesperado en su carrera, puesto que se visualizaba trabajando en el Congreso Nacional y mermado su condición económica.

Finalmente y, en cuanto a la relación de causalidad entre la conducta de la demandada y los perjuicios demandados, afirma que existe una relación de causa y efecto, puesto que la demandante presenta daño psicológico compatible con la exposición mediática a partir de la emisión del reportaje emitido en el noticiero central de Chilevisión el 7 de septiembre de 2016, presentando consecuencias en distintas esferas de su vida.

OCTAVO: Que la parte demandada no rindió prueba alguna.



NOVENO: Que es un hecho central para la presente causa, y que además se encuentra reconocido por las partes, el haber sido emitido el reportaje periodístico en cuestión, en la fecha y horario señalada en la demanda, el que fue producido por personal del canal televisivo demandado.

DÉCIMO: Que, analizando las pruebas rendidas, incluyendo el reportaje que fue acompañado de forma íntegra en estos autos, prueba documental acompañada y testimonial rendida, es posible tener por establecidos los siguientes hechos:

1. Que con fecha 13 de marzo de 2015, se celebró un contrato de prestación de servicios entre don Oscar del Carmen Vega Elkins y doña Carola Pamela Rivera Campusano, a fin de realizar las gestiones tendientes a la oposición al lanzamiento, tramitación del incidente de mejoras en los autos rol C – 28.879 – 2000, seguido ante el Juzgado de Letras de Villa Alemana. En donde las partes acordaron el pago de la suma de \$1.500.000.- pagaderos en 6 cuotas de \$209.000, a partir del 30 de abril de 2015, hasta el 30 de septiembre de 2015, sin embargo, en caso que se logre sentencia favorable se pagaría el 30% del monto obtenido, y en caso que exista avenimiento, se pagaría el 40% del mismo monto.
2. Que con fecha 7 de octubre de 2015, entre don Oscar Vega Elkins en representación de don Óscar Vega Vega y doña Victoria Elkins Elkins e Inmobiliaria e Inversiones Puerta del Sol SpA., suscribieron un contrato de transacción mediante escritura pública, en la que se acordó el pago de \$90.000.000.- más la entrega de dos inmuebles correspondientes a viviendas económicas nuevas acogidas al D.F.L N° 2, ubicadas en los lotes 209 y 210 del proyecto inmobiliario Conjunto Residencial Marga Marga II.
3. Que suscrita la transacción, se pagó a la actora la suma de \$30.000.000.-
4. Que la demandante se desempeñó como asesora parlamentaria del diputado don Rodrigo González Torres, a partir del 7 de abril de 2014, correspondiendo el último contrato de trabajo al celebrado el 19 de enero de 2016, cuya vigencia se extendía hasta el 30 de diciembre del mismo año.
5. Que con fecha 7 de septiembre de 2016, se emitió en la franja denominada “Reportaje a fondo”, en el Noticiero Central del canal Chilevisión, un reportaje titulado “Ancianos acusan que su hijo los estafó con 90 millones. Una abogada que trabaja con un diputado estaría involucrada en un supuesto acuerdo notarial fraudulento”.



Foja: 1

6. Que durante la transmisión del reportaje aparecen diversas personas efectuando relatos de lo sucedido, incluyendo la “voz en off” del periodista Stjepan Tarbuskovic, además de franjas y mensajes emitidos en pantalla durante el reportaje, los que comienzan con la denuncia efectuada por dos mujeres, que en el reportaje aparecen como Luisa Vega y Graciela Vega, hijas del supuesto matrimonio afectado, quienes también aparecen en el video, además del Óscar Vega Elkins y la demandante.
7. Que con fecha 9 de septiembre de 2016, esto es dos días después de la emisión del reportaje, se pone término anticipado al contrato de prestación de servicios bajo la causal establecida en la letra d) esto es, decisión unilateral del parlamentario fundada en la pérdida de confianza hacia el prestador de servicios, celebrado entre don Pablo Ernesto Oneto García, Subsecretario Administrativo de la Cámara de Diputados y doña Carola Pamela Rivera Campusano, como asesora parlamentaria para el Diputado Rodrigo González Torres.
8. Que con fecha 17 de octubre de 2016, se realizó la audiencia de formalización en los autos RIT N° 749 – 2016, en contra de la actora por los delitos de estafa y apropiación indebida, la que mediante audiencia de 27 de julio de 2017, el Ministerio Público comunica la decisión de no perseverar en el procedimiento debido a que no existen antecedentes para formular acusación.

UNDÉCIMO: Que el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado”, norma que es reiterada por el artículo 1 de la Ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, según el cual “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley”.

A su turno, el Título V de la misma Ley 19.733, denominado “De las infracciones, de los delitos, de la responsabilidad y del procedimiento”, contiene el artículo 39, el cual señala que “La responsabilidad penal y civil por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de las libertades que consagra el inciso primero del número 12° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, se determinará por las normas de esta ley y las de los Códigos respectivos”.



Foja: 1

Por su parte, el inciso primero del artículo 40 de la ley en comento, ordena que “La acción civil para obtener la indemnización de daños y perjuicios derivada de delitos penados en esta ley se regirá por las reglas generales”, añadiendo, en su inciso segundo, que “La comisión de los delitos de injuria y calumnia a que se refiere el artículo 29, dará derecho a indemnización por el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral”.

DUODÉCIMO: Que las normas arriba citadas, dan cuenta que nuestro ordenamiento jurídico, por un lado, consagra las libertades de opinión e información, y por el otro, sanciona el ejercicio delictivo y abusivo de las mismas, contemplando la responsabilidad jurídica que puede ser de naturaleza penal y civil, y que es regulada por “los Códigos respectivos” y “las reglas generales”.

En efecto, los delitos cometidos en ejercicio de las libertades de opinión e información darán origen a responsabilidad criminal regulada en el Código Penal, sin perjuicio de lo cual, el hecho delictivo puede configurar, al mismo tiempo, un ilícito civil que se regulará por las normas generales, que no pueden ser otras que las contenidas en el Código Civil, lo que concuerda asimismo con lo dispuesto en el artículo 2314 de dicho código, cuando contempla la responsabilidad civil del que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, “sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”.

DÉCIMO TERCERO: Que, tal como se ha venido señalando, la prueba rendida es suficiente para establecer que efectivamente con ocasión de la denuncia realizada por las hijas del matrimonio conformado por don Luis Vega Vega y doña Victoria Elkins Elkins, acusando a la abogada Carola Rivera Campusano del delito de estafa y apropiación indebida, fue realizado un reportaje televisivo realizado por el periodista Stjepan Tarbuskovic, de Red de Televisión Chilevisión S.A., que fue emitido el día 7 de septiembre de 2016, durante la emisión del Noticiero Central de Chilevisión Noticias, en la sección denominada “Reportajes a Fondo”.

DÉCIMO CUARTO Que en razón de lo anterior, la actora dedujo demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, de conformidad a las reglas previstas en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil.

De este modo, es necesario determinar si Red de Televisión Chilevisión S.A., ha incurrido en responsabilidad delictual o cuasidelictual con arreglo a los presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Título XXXV del Libro IV del Código Civil, que exige la existencia de una acción u omisión dolosa o culpable, que cause daño y que haya una relación de causalidad entre el hecho y el daño.



DÉCIMO QUINTO: Que en relación al primer elemento a analizar, esto es, la comisión de un hecho ilícito, doloso o culpable por parte de Red de Televisión Chilevisión S.A., la demandante sostiene que éste consistiría en la emisión el día 7 de septiembre de 2016, de un reportaje, durante el Noticiario Central de Chilevisión Noticias, en la sección “Reportaje a Fondo” en el que se formularon expresiones difamatorias del honor, imputaciones falsas, omisión deliberada de descargos y grave negligencia en la recopilación y presentación del reportaje en contra de la abogada Carola Rivera Campusano.

Al respecto, la demandada Red de Televisión Chilevisión S.A., se defiende señalando que no existe ni dolo ni culpa, en razón que la difusión de la noticia no tuvo la intención o el ánimo de perjudicar a la actora, sino que las imágenes emitidas formaron parte de una nota periodística informativa, cuyas opiniones fueron realizadas en términos objetivos y condicionales, puesto que los hechos revestían un claro interés público, actuando con la debida diligencia, observando los deberes de cuidado impuestos a todo medio de comunicación social para el ejercicio de la actividad informativa.

DÉCIMO SEXTO: Que el reportaje objeto de este juicio fue apreciado directamente por este sentenciador, constatándose que éste relata la denuncia realizada por las hijas del matrimonio Vega Elkins en contra de su hermano Óscar Vega Elkins y la abogada Carola Rivera Campusano, acusando que, a propósito de un mandado fraudulentamente adquirido, su hermano y en compañía de la abogada demandante, se habrían quedado con el dinero que correspondía a sus padres, el cual se habría obtenido a raíz de una negociación que comprendía el entregar a una inmobiliaria la propiedad que ellos habitaban, exhibiendo un certificado en el que consta el retiro del dinero por parte de la abogada; también se agrega que la abogada trabajaba en el Congreso Nacional con el diputado Rodrigo González. Además, se entrevista a don Óscar Vega Elkins, a fin de emitir sus descargos respecto a la denuncia realizada por sus hermanas y también a la abogada Carola Rivera Campusano, quien explica su labor profesional en el caso investigado.

Así se pudo observar del material audiovisual acompañado, que el reportaje se inicia con el siguiente relato, que resume lo que se exhibirá: “Hay un matrimonio de ancianos que denuncian que su propio hijo junto con su abogada los habrían estafado con noventa millones de pesos que les correspondería como indemnización para abandonar su casa. Acusan que la abogada trabaja en el Congreso como asesora legal de un diputado. Abogada que actualmente figura como imputada en una investigación por estafa, apropiación indebida y prevaricación, que lleva en su contra la Fiscalía de Villa Alemana”.



DÉCIMO SÉPTIMO: Que, como se dijo, la parte demandante imputa a Red de Televisión Chilevisión S.A., un actuar doloso o culpable. Ante lo cual, el canal se defiende señalando que obró en ejercicio legítimo del derecho de emitir opinión e informar, garantizado por el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República y por la Ley N° 19.733.

En relación con lo anterior, el actor alegó en su libelo que el actuar de la demandada no se rige por un estándar profesional, serio y objetivo, sino que omitió información, afirmó imputaciones que denostaron a la abogada Carola Rivera Campusano, atribuyéndole delitos inexistentes, que jamás profirieron las víctimas.

DÉCIMO OCTAVO: Que teniendo en cuenta la defensa opuesta, siendo el ejercicio de un derecho una causal de justificación cuya función es excluir la antijuridicidad del acto, es entonces la licitud o ilicitud de la conducta de Red de Televisión Chilevisión S.A., lo que es preciso dilucidar, de manera que se analizará si la emisión del reportaje el día 7 de septiembre de 2016, se encuentra amparado y justificado por el ejercicio de las libertades de opinar o informar, o si por el contrario, se encuentra fuera de todo marco jurídico.

Que para dilucidar esta alegación es necesario recurrir al Código de Ética del Colegio de Periodistas, entendiéndose por tal “como la definición teórica y la aplicación práctica permanente y obligatoria de normas conductuales, valóricas y de procedimiento, que deben observar los miembros de la orden para que su actuación profesional sea correcta y socialmente valiosa.” De este modo, proporciona un marco de trabajo para dirigir las funciones esenciales de los periodistas, establecer políticas y desarrollar estrategias para velar por el correcto desarrollo profesional.

Por otra parte, señala que la información en periodismo se entiende como un bien social y no como un producto, lo que significa que el periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida y es responsable, no sólo ante quienes controlan los medios, sino principalmente ante la sociedad.

Así, en su artículo primero señala que “en su quehacer profesional el periodista se regirá por la veracidad como principio, entendida como la entrega de información responsable de los hechos.” Continúa, en su artículo sexto que “el periodista deberá establecer siempre, al informar, una distinción clara entre los hechos, las opiniones y las interpretaciones, evitando toda confusión o distorsión deliberada de éstos”.

DÉCIMO NOVENO: Que el primer elemento a considerar es que la conducta reprochada a Red de Televisión Chilevisión S.A., se produjo en el ámbito de la investigación y posterior difusión de un reportaje en el



«RIT»

Foja: 1

noticiero central de la estación televisiva, cuya labor es netamente informativa.

Que la prueba rendida en autos, permite determinar que el día 7 de septiembre de 2016 se emitió un reportaje relativo a denuncia de un matrimonio de adultos mayores respecto del delito de estafa y apropiación indebida supuestamente cometido por su hijo don Óscar Vega Elkins y la abogada Carola Rivera Campusano.

Ahora bien, los antecedentes son insuficientes para determinar si las declaraciones contenidas en dicho informe fueron falsas, toda vez que el medio de comunicación reproduce las declaraciones de los participantes del reportaje, principalmente, de doña Luisa Vega y doña Graciela Vega, puesto que las aseveraciones vertidas por el periodista fueron principalmente realizadas en términos condicionales, reproduciendo la información declarada por las protagonistas del reportaje.

Por otra parte, las declaraciones de testigos si bien es cierto están contestes en que en el reportaje antes mencionado se le imputan delitos de apropiación indebida, estafa y prevaricación a la abogada Carola Rivera Campusano, de la sola revisión del reportaje se puede determinar que las acusaciones son realizadas por los denunciantes, no por el canal de televisión, puesto que éste se remite a la exposición de hechos de connotación pública.

Que en ese sentido, si bien la demandante reclama que las expresiones en su contra no fueron directamente efectuadas por el matrimonio afectado, cuestión que aparece como cierta al ver el video objeto de este juicio, de todas formas del mismo reportaje es posible extraer que las acusaciones fueron efectuadas en cámara por las hijas del matrimonio.

VIGÉSIMO: Que, como se ha explicado, la parte demandada sustenta su defensa en el ejercicio legítimo de su derecho de informar y emitir opinión, precisamente debido a la denuncia realizada por doña Graciela Vega y Luisa Vega, hijas del por el matrimonio Vega Elkins, en contra de don Óscar Vega Elkins y la abogada Carola Rivera Campusano, y la investigación penal que se estaba llevando a cabo, por lo que los hechos exhibidos en el programa habrían sido de interés público.

En relación a lo anterior, la parte demandante ha sostenido que la demandada difundió un reportaje que contenía hechos falsos, y en su réplica alega que el único argumento de la demandada para sostener su defensa, era la existencia de una investigación criminal desarrollada por el Ministerio Público, pero que omite que en dicha investigación la Fiscalía decidió no perseverar.



VIGÉSIMO PRIMERO: Que como ha quedado establecido, efectivamente en audiencia de fecha 27 de julio de 2017, llevada a cabo en causa RIT N° 749 - 2016, RUC N° 1610011622 - 0, del Juzgado de Garantía de Villa Alemana, el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar en el procedimiento.

Como indica el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal, al cerrar la investigación, el Fiscal puede comunicar la decisión de no perseverar en el procedimiento, por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que sobre este punto, resulta útil tener presente la opinión del profesor Enrique Barros Bourie, quien refiriéndose a la infracción de la presunción de inocencia, en relación con el derecho a la honra, indica que “es un principio básico del derecho procesal penal que ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no sea condenada por sentencia firme (Código Procesal Penal, artículo 4°). Sin embargo, la información acerca de los sospechosos o imputados en la comisión de hechos ilícitos no puede estar sujeta a reserva hasta que se dicte sentencia de término, porque ello afectaría la publicidad de los juicios y lesionaría severamente los flujos de información. El equilibrio entre la presunción de inocencia y la información acerca de hechos delictivos no plantea una pregunta relativa a si esa información es lícita en absoluto, sino a los deberes de cuidado que se deben emplear en informar. La información o juicio acerca de un hecho ilícito debe asumir que el sospechoso o imputado no está condenado, y se debe fundar en un mínimo de hechos provenientes de una fuente razonable y que no sean maliciosamente tergiversados” (“Tratado de Responsabilidad Extracontractual”. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2006, página 590).

Así las cosas, puede concluirse que el hecho que la causa criminal no llegara a una sentencia condenatoria, habiendo terminado por la decisión del Fiscal de no perseverar, no es argumento suficiente para considerar, a priori, que la emisión del programa careció de fundamento y justificación, pues como se ha dicho, se trataba de una investigación en curso de delitos de acción penal pública, los que envuelven un interés real para su comunicación.

En definitiva, que Red de Televisión Chilevisión S.A., haya informado sobre hechos que estaban siendo investigados debido a la posibilidad que constituyeran el delito de estafa y apropiación indebida, aunque no se haya llegado a una sentencia condenatoria, no implica necesariamente la emisión del reportaje en una conducta ilícita.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, es necesario analizar si Red de Televisión Chilevisión S.A., tenía fundamentos, basados en hechos



Foja: 1

provenientes de fuentes serias, para exhibir el reportaje, y que en consecuencia su actuar no fue doloso o culpable.

Al respecto, durante toda la emisión del reportaje recurre a las supuestas víctimas del delito de estafa y apropiación indebida, entrevistando a las hijas del matrimonio Vega Elkins, quienes exhiben una serie de documentos respecto al pago de la indemnización.

Asimismo, en el reportaje se entrevista a don Óscar Vega Elkins, quien señala que se le pagó treinta millones de pesos a la abogada por sus servicios. Además, se entrevistó a la actora quien señala que ella recibió el pago en virtud del contrato de prestación de servicios suscrito con don Óscar Vega Elkins – hijo de los denunciante -, y que los restantes antecedentes fueron entregados al Ministerio Público, a fin de determinar su inocencia.

En ese sentido, las declaraciones vertidas durante la emisión del reportaje corresponden a la reproducción de los dichos de los denunciante.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, además, la demandante acusa a Red de Televisión Chilevisión S.A., de haberla tratado de estafadora y no haber entregado a los televidentes elementos de juicio que permitiesen poner en duda lo mostrado, acusando al canal de mostrar hechos falsos.

Al respecto, ha quedado establecido que los hechos mostrados por Red de Televisión Chilevisión S.A. en su exhibición fue producto de una investigación periodística, en que se contrastaron diversos testimonios de los involucrados. Asimismo, la actora pudo emitir sus descargos los que fueron exhibidos en el mismo reportaje. Si bien es cierto, alega que su declaración fue cercenada, omitiendo información importante, que podría influir positivamente en la opinión que el público pudo recibir del reportaje, la prueba es insuficiente para determinar dicha circunstancia, puesto que, a partir del minuto 08:25, se incluye la declaración de doña Carola Rivera Campusano, quien explica su gestión respecto al acuerdo al que arribó don Oscar Vega Elkins con la Inmobiliaria, concluye señalando “toda la documentación está en manos de la fiscalía. Que sea la fiscalía la que me diga si soy responsable de eso. Es un tema netamente semántico”. A continuación, el periodista señala que figura como imputada en una investigación ante la Fiscalía de Villa Alemana, informando el estado actual de la denuncia realizada por las partes.

A mayor abundamiento, las posibles apreciaciones subjetivas de quienes vieron el programa, acerca de la persona de la demandante y su calidad profesional, quien pudo efectuar todos los descargos respecto a las imputaciones realizadas por las denunciante en el reportaje, no transforman los hechos grabados y emitidos en falsos.



Cabe agregar que, dejando a un lado cualquier subjetividad en cuanto a la interpretación de los receptores de la información, lo mostrado en el reportaje fue lo que efectivamente sucedió. La demandante, doña Carola Vega Elkins fue imputada por el delito de estafa, apropiación indebida y prevaricación en los autos RIT N° 749 – 2016, ante el Juzgado de Garantía de Villa Alemana, hechos reconocidos por la actora, quien además señaló que todos los antecedentes para determinar su inocencia fueron entregados al Ministerio Público.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, en lo relacionado al actuar abusivo del canal de televisión, en cuanto este habría tenido a la vista el contrato de honorarios profesionales de la demandante, además de otra documentación que pudiera en cierto sentido desvirtuar la eventual responsabilidad que le podría acaecer a la demandante en estos hechos, y sin perjuicio de que la prueba rendida, especialmente la testimonial rendida dan cuenta de que efectivamente el canal de televisión tuvo a la vista dicha documentación, incluyendo los contratos celebrados y especialmente el contrato de honorarios profesionales, es necesario recalcar que en ningún caso se ha hecho imputación relacionada con la falsedad de dicho contrato de honorarios, ni tampoco que la demandante haya obtenido un monto mayor al que por dicho concepto le correspondía, sino que las imputaciones tienen su origen, principalmente, en que el contrato de mandato celebrado entre el matrimonio de ancianos y su hijo Óscar Vega, para que este los representara en las negociaciones habría sido obtenido de manera fraudulenta, y que luego, al finalizar la negociación, dicho hijo en conjunto con la abogada demandante se habrían apropiado del monto de la indemnización, y en ese sentido, el reproche efectuado no viene relacionado precisamente con la existencia y validez del citado contrato de honorarios, sino que con la obtención ilícita del mandato conferido al señor Óscar Vega, y luego que dichos dineros no fueron recibidos por el matrimonio, quedándose con dicha suma dicho hijo y la demandante, en su calidad de abogada.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, finalmente, en cuanto a que el reportaje habría mostrado como abogado de la familia denunciante a una persona que no reunía dicha calidad al momento del reportaje, y que incluso tenía un nombre distinto, lo cierto es que, sin perjuicio de que la prueba rendida, especialmente la declaración testimonial del señor Chueca y la copia de la denuncia efectuada dan cuenta de dicha circunstancia, la misma no produce efectos para establecer un supuesto actuar ilícito de la demandante, ya que, a juicio de este sentenciador, dicha persona en su relato solamente reseña acerca de las gestiones judiciales efectuadas para perseguir la eventual responsabilidad de los imputados, esto es la demandada y el señor Óscar Vega, sin influir ni modificar el contenido y sentido del reportaje en cuestión, y sin tener mayor relevancia para resolver lo discutido en este



«RIT»

Foja: 1

juicio. Todo lo anterior, sin perjuicio de que dicha persona relata en todo momento que dichas actuaciones judiciales fueron efectuadas por “nosotros”, lo que da cuenta de que se refiere a un grupo o equipo de trabajo.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, de lo que se viene razonando, no se divisa que Red de Televisión Chilevisión S.A. haya incurrido en una conducta ilícita, pues, pesando sobre los demandantes la prueba del dolo, o en su defecto, la culpa que se atribuye a la parte demandada, no hay prueba idónea en autos que permitan acreditarlos.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, en definitiva, no se configura la existencia de un ilícito civil, desde que el comportamiento de Red de Televisión Chilevisión S.A., aparece desprovisto de dolo o culpa y enmarcado en el legítimo ejercicio de las libertades de información y de opinión que garantiza el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política del Estado, y, por tanto, orientado al propósito que es consustancial a ellas, cual es proporcionar información de interés general a la que el público tiene derecho de acceder.

VIGÉSIMO NOVENO: Que, dado lo anterior, se procederá a desestimar la demanda indemnizatoria de autos por la ausencia de un hecho ilícito e imputable a Red de Televisión Chilevisión S.A., todo lo cual impide establecer que se cumplen los requisitos que exige la responsabilidad extracontractual para ser indemnizada, acogiéndose, por tanto, la defensa de la parte demandada, por haber adquirido convicción en base a la prueba rendida en autos, que el medio de comunicación ejerció sus libertades de información y de opinión acerca de un tema de interés público.

TRIGÉSIMO: Que el resto de antecedentes probatorios, alegaciones de las partes y/o defensas, en nada obstan lo concluido, aun cuando, a juicio de este sentenciador, de la prueba rendida es posible presumir fundadamente la existencia de un daño en la demandante, el que podría eventualmente tener una causa diversa, todo lo cual no es materia de este juicio, por lo que se omitirá mayor pronunciamiento.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, en razón de lo señalado en el considerando precedente, es posible concluir que existieron motivos plausibles para litigar en favor de la demandante, por lo que será absuelta del pago de las costas de esta causa.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; Ley N° 19.733; y artículos 1698 y 2314 y siguientes del Código Civil, se declara:



«RIT»

Foja: 1

- I. Que se rechaza en todas sus partes la demanda deducida por doña Carola Rivera Campusano con fecha 22 de enero de 2019, en contra de Red de Televisión Chilevisión S.A.;
- II. Que no se condena en costas a la demandante por estimarse que tuvo motivos plausibles para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

ROL N° C – 2943 – 2019.

Pronunciada por don Mauricio Vergara Vargas, Juez Subrogante.-

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, diecisiete de Julio de dos mil veinte**

